

Edición  
en lengua española

## Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	<i>I Comunicaciones</i>	
	<b>Comisión</b>	
2001/C 179/01	Tipo de cambio del euro .....	1
2001/C 179/02	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE y del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE, sobre las medidas de ayudas registradas con el número C 28/2001 (ex N 159/2001) — Países Bajos — Subvención para el reembolso de las cotizaciones sociales del año 2000 <sup>(1)</sup> .....	2
2001/C 179/03	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 15/2001 (ex NN 11/2000) — Ayuda de reestructuración a Ambau GmbH Stahl- und Anlagenbau Sperenberg <sup>(1)</sup> .....	6
2001/C 179/04	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE y del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE, sobre las medidas de ayuda registradas con la referencia C 29/2001 (ex NN 21/2000) — Italia — Medidas a favor de los pescadores tras el alza del precio del gasóleo <sup>(1)</sup> .....	14
2001/C 179/05	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 27/2001 (ex NN 2/2001) — Francia — Programa para el control de la contaminación de origen agrario (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole -PMPOA) .....	18
2001/C 179/06	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones <sup>(1)</sup> .....	29
2001/C 179/07	No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.2303 — Ciaoweb/WE Cube) <sup>(1)</sup> .....	29
2001/C 179/08	No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.2213 — Du Pont/Sabancı Holdings/JV) <sup>(1)</sup> .....	30

<u>Número de información</u>	Sumario ( <i>continuación</i> )	Página
2001/C 179/09	No oposición a una concentración notificada [Asunto COMP/M.2281 — Endesa/CDF/Snet (vease CECA.1352)] <sup>(1)</sup> .....	30
2001/C 179/10	Notificación previa de una operación de concentración (asunto COMP/M.2337 — Nestlé/Ralston Purina) <sup>(1)</sup> .....	31
2001/C 179/11	Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen .....	32
<hr/>		
	II <i>Actos jurídicos preparatorios</i>	
	.....	
<hr/>		
	III <i>Informaciones</i>	
	<b>Comisión</b>	
2001/C 179/12	Modificación del anuncio de licitación de la subvención a la expedición de arroz descascarillado de grano largo con destino a la isla de Reunión .....	35

## I

*(Comunicaciones)*

## COMISIÓN

**Tipo de cambio del euro <sup>(1)</sup>****22 de junio de 2001***(2001/C 179/01)*

<b>1 euro</b>	=	7,4531	coronas danesas
	=	9,151	coronas suecas
	=	0,6037	libras esterlinas
	=	0,8528	dólares estadounidenses
	=	1,3002	dólares canadienses
	=	105,98	yenes japoneses
	=	1,5168	francos suizos
	=	7,8600	coronas noruegas
	=	89,81	coronas islandesas <sup>(2)</sup>
	=	1,651	dólares australianos
	=	2,0635	dólares neozelandeses
	=	6,8554	rands sudafricanos <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fuente: Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

<sup>(2)</sup> Fuente: Comisión.

## AYUDAS ESTATALES

**Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE y del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE, sobre las medidas de ayudas registradas con el número C 28/2001 (ex N 159/2001) — Países Bajos — Subvención para el reembolso de las cotizaciones sociales del año 2000**

(2001/C 179/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 8 de mayo de 2001, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a los Países Bajos su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Pesca  
Dirección D — Unidad Jurídica  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax (32-2) 295 19 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a los Países Bajos. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

## RESUMEN

Por carta de 1 de marzo de 2001, recibida el 5 de marzo, los Países Bajos notificaron a la Comisión un proyecto de orden por el que se prevé el pago de una subvención directa a los pescadores en concepto de reembolso de las cotizaciones sociales abonadas en 2000. De acuerdo con las autoridades neerlandesas, dicha subvención tiene por finalidad el pago de una compensación financiera a los pescadores cuyos ingresos han sufrido un acusado descenso debido al incremento del coste del carburante durante el año 2000.

Esta orden se aplica a los pescadores remunerados a la parte, por lo que afecta, en la práctica, al conjunto de los pescadores a excepción de los embarcados en los grandes arrastreros pelágicos. La subvención prevista no podrá superar el importe de las cotizaciones que han sido abonadas en 2000 y será de 5 900 florines neerlandeses (2 677 euros) como máximo; sólo tendrán derecho a la subvención los pescadores con residencia fiscal en los Países Bajos. El importe presupuestario global previsto para este régimen de ayuda es de 12 millones de florines neerlandeses (5,45 millones de euros).

El presente régimen de ayuda deberá ser analizado siguiendo las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura <sup>(1)</sup>.

Las autoridades neerlandesas justifican la compatibilidad de dichas medidas de ayuda por medio del punto 2.9 de las Directrices citadas, titulado «casos especiales», sin dar mayores precisiones sobre el caso o los casos a los que se refieren.

Pueden tenerse en cuenta tres casos: ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional (punto 2.9.3), ayudas al empleo (punto 2.9.6), ayudas a la renta (punto 2.9.2).

El punto 2.9.3 no puede aplicarse, ya que el aumento del precio del carburante es un hecho coyuntural que, en teoría, puede afectar a cualquier agente económico; este hecho no puede ser calificado de acontecimiento de carácter excepcional.

Tampoco puede aplicarse el punto 2.9.6 puesto que no se reúnen las condiciones exigidas por las Directrices sobre ayudas al empleo <sup>(2)</sup> (existencia de un acontecimiento extraordinario o salvamento o reestructuración de las empresas en cuestión).

<sup>(1)</sup> DO C 19 de 20.1.2001, p. 7.

<sup>(2)</sup> DO C 334 de 12.12.1995, p. 4.

Este régimen de subvención no puede considerarse compatible con el mercado común en virtud del punto 2.9.2 porque tampoco se reúnen las condiciones exigidas, habida cuenta de que esta subvención se paga sin distinción a todos los pescadores remunerados a la parte y no corresponde a una medida dirigida hacia los pescadores afectados por un plan de adaptación o de reducción de capacidad de la flota neerlandesa. Puede considerarse que esta subvención constituye, indirectamente, una ayuda al funcionamiento en favor de las empresas que dan trabajo a estos marinos.

Por otro lado, no existe relación entre esta subvención y unas medidas de ayuda para el salvamento o la reestructuración de empresas en crisis que hubieran sido adoptadas en el marco del programa de reducción de capacidad de la flota actualmente proyectado por las autoridades neerlandesas. Dicho régimen de ayuda, por consiguiente, no puede ser analizado a la luz de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis <sup>(3)</sup>, posibilidad abierta por el punto 2.2.4 de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. Desde esta perspectiva, también es incompatible con el mercado común.

Por consiguiente, basándose en las Directrices citadas, la Comisión formula sus dudas acerca de la compatibilidad de dichas medidas de ayuda con el mercado común.

La Comisión recuerda asimismo los términos del artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, según el cual, en caso de decisión negativa y en el caso de que la ayuda proyectada hubiera sido pagada por el Estado miembro, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda.

## CARTA

«De Commissie heeft de eer de regering van Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten met betrekking tot de bovengenoemde maatregel verstrekte inlichtingen, besloten heeft de procedure voor formeel onderzoek in te leiden als bedoeld in artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag en in Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van genoemd artikel <sup>(4)</sup>.

### I. Procedure

De Nederlandse autoriteiten hebben bij brief van 1 maart 2001, die bij de Commissie is ontvangen op 5 maart, de Commissie in kennis gesteld van het voornemen tot vaststelling van een regeling die voorziet in een subsidie aan de vissers als terugbetaling van de in 2000 betaalde sociale premies.

<sup>(3)</sup> DO C 288 de 9.10.1999, p. 2.

<sup>(4)</sup> PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.

In artikel 8 van de regeling wordt bepaald dat de subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de onderhavige steunregeling door de Commissie. Dit dossier is, als gemelde steunmaatregel, geregistreerd onder nr. N 159/2001.

### II. Beschrijving

Deze regeling houdt in dat aan maatschapsvissers aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen een eenmalige subsidie wordt verleend als terugbetaling van de sociale premies die in het jaar 2000 zijn betaald aan het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij. In de praktijk geldt deze regeling voor alle zeevissers (schipper-eigenaren en werknemers) met uitzondering van de opvarenden op de grote pelagische trawlers.

Het deelloonstelsel is een stelsel waarbij het inkomen van de opvarenden niet bestaat uit een vast loon, maar bepaald wordt aan de hand van de omzet van het vissersvaartuig tijdens de visreis. Op die omzet worden de „gemeenschappelijke kosten” (dat wil zeggen de bedrijfskosten van het vaartuig in verband met de visreis, waaronder de brandstofkosten) in mindering gebracht. De zo berekende opbrengst van de visreis wordt verdeeld over de visserijonderneming enerzijds en de vissers anderzijds, waarbij het percentage dat aan elk van beide partijen toekomt, is vastgelegd in een contract tussen de visserijonderneming enerzijds en alle vissers samen anderzijds. Het gedeelte dat de vissers toekomt, wordt vervolgens onder hen verdeeld door toepassing van een aantal coëfficiënten die samenhangen met hun functie aan boord; de eigenaar van het vaartuig, die het hoofd is van de onderneming en in het algemeen ook de kapitein aan boord van het vissersvaartuig, ontvangt, in zijn hoedanigheid van mee varende visser, ook zijn deel uit de verdeling over de vissers.

Volgens de inlichtingen van de Nederlandse autoriteiten is deze subsidie bedoeld als financiële tegemoetkoming voor vissers die hun inkomen hebben zien dalen als gevolg van de stijging van de brandstofprijzen in het jaar 2000.

De geplande subsidie kan nooit meer bedragen dan de in het jaar 2000 betaalde premies, en ten hoogste 5 900 NLG (2 677 EUR). Het bedrag van de jaarlijkse premie varieert van 6 082 tot 7 402 NLG. Voorts komen voor de subsidie alleen vissers in aanmerking die in Nederland belastingplichtig waren.

In het totaal is 12 miljoen NLG (5,45 miljoen EUR) budgettair beschikbaar voor deze regeling. Als dit bedrag niet voldoende zou zijn om aan alle aanvragen te voldoen, worden de begunstigen bepaald volgens de datum waarop het aanvraagdossier volledig was.

### III. Beoordeling

III.1. Deze steunregeling moet worden onderzocht in het licht van de Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector <sup>(5)</sup>.

<sup>(5)</sup> PB C 19 van 20.1.2001, blz. 7.

De Nederlandse autoriteiten wijzen erop dat deze subsidie verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt omdat ze verenigbaar is met hoofdstuk 2.9 van de Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector. Dit wordt echter door hen niet nader gepreciseerd. De steunregeling moet derhalve worden getoetst aan de bepalingen in het genoemde hoofdstuk 2.9.

Hoofdstuk 2.9, getiteld „Bijzondere gevallen”, bevat bepalingen met betrekking tot een aantal steunregelingen in specifieke situaties. Een aantal gevallen hoeft, zonder dat dienaangaande nadere analyse nodig is, niet verder onderzocht te worden: het geval van de steun aan overheidsbedrijven (punt 2.9.1), het geval van de steun voor de kosten van verzekeringspremies (punt 2.9.4), en het geval van de steun voor perifere regio's (punt 2.9.5).

Er resten dus drie gevallen van steunverlening: de inkomenssteun (punt 2.9.2), de steun tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen (punt 2.9.3) en de werkgelegenheidssteun (punt 2.9.6). De steunregeling moet successievelijk aan de bepalingen voor deze drie gevallen worden getoetst.

III.2. De onderhavige steun kan niet worden beschouwd als steun die bedoeld is voor herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen (punt 2.9.3).

De stijging van de brandstofprijzen kan niet als een buitengewone gebeurtenis worden aangemerkt. Zo'n stijging is een conjuncturele gebeurtenis waarmee ieder economisch subject te maken kan krijgen en dat hij vooruitziend moet proberen te integreren in het beheer van zijn bedrijf, door met het oog op het tijdstip waarop de gebeurtenis zich kan voordoen zo mogelijk de consequenties ervan te voorkomen.

III.3. De onderhavige steun zou daarentegen op het eerste gezicht kunnen worden beschouwd als werkgelegenheidssteun, omdat deze steun, gezien de bijzondere kenmerken van het beloningsstelsel van de vissers (deelloon), tot gevolg heeft gehad dat de vissers rechtstreeks worden gecompenseerd voor de inkomensachteruitgang tijdens de betrokken periode. Deze rechtstreekse steun zou daarom de betrokken vissers kunnen stimuleren om hun arbeidscontract niet te verbreken en hun baan te houden. Zonder deze steun zou het immers kunnen dat zij hun werk niet langer voldoende lonend vinden.

Punt 22 van de Richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun <sup>(6)</sup> bepaalt echter dat dergelijke steun slechts in bepaalde gevallen kan worden toegestaan, namelijk enerzijds wanneer de steun dient tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen, een geval waarvan hierboven reeds is gezegd dat het niet van toepassing is, en anderzijds in het kader van de redding of het opstellen van een herstructurerings- of omschakelingsplan voor een in moeilijkheden geraakte onderneming. De door de Nederlandse regering vastgestelde maatregelen voldoen echter niet aan deze criteria, aangezien ze bedoeld zijn als tegemoetkoming in de

directe inkomensachteruitgang van de betrokken vissers en geen verband houden met een probleem van levensvatbaarheid van de ondernemingen dat reddingsmaatregelen of een herstructurerings- of omschakelingsplan vergt. Deze steunregeling kan dus niet verenigbaar worden verklaard met de richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun.

III.4. Resteert dus het geval van de inkomenssteun. Volgens punt 2.9.2 van de richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector wordt inkomenssteun die aan werknemers in de visserij- en aquacultuursector wordt verleend, als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt beschouwd als deze steun wordt verleend in het kader van begeleidende sociaal-economische maatregelen in verband met de aanpassing of vermindering van de capaciteit of met uitzonderlijke omstandigheden die geval per geval worden onderzocht.

Deze steunregeling kan niet beschouwd worden als een regeling in verband met uitzonderlijke omstandigheden, aangezien de regeling gerelateerd is aan een conjuncturele economische gebeurtenis, die op zich niet kan worden aangemerkt als een uitzonderlijke gebeurtenis (en evenmin trouwens als een buitengewone gebeurtenis).

Voorts is deze steunregeling ook geen onderdeel van een totaalpakket van begeleidende sociaal-economische maatregelen in verband met de aanpassing of vermindering van de capaciteit. Het eerste doel van deze directe subsidie aan de vissers is immers om hen te compenseren voor hun inkomensachteruitgang. Deze subsidie geldt voor alle maatschapsvissers, zonder onderscheid. De steunregeling betreft dus niet een maatregel waarvoor de vissers in aanmerking zouden komen die worden getroffen door een plan voor aanpassing of vermindering van de capaciteit van de vloot.

Ook kan worden gezegd dat deze subsidie indirect steun is voor de bedrijfsvoering van de ondernemingen waarbij deze vissers werken. Aangezien de beloning van de vissers wordt berekend aan de hand van de opbrengst van de visreis (omzet van het vaartuij, verminderd met de gemeenschappelijke kosten) is deze subsidie immers gunstig voor de vissersondernemingen doordat hun wordt bespaard dat zij een groter gedeelte van het resultaat van de visreizen aan de beloning van de vissers moeten besteden; de steunregeling kan bijvoorbeeld voorkomen dat deze bedrijven opnieuw moeten onderhandelen over de contractbepalingen betreffende de verdeling van de opbrengst van de visreizen: als deze subsidie niet bestond, zouden de vissers nieuwe onderhandelingen over de verdeling van de opbrengst vragen of zouden ze hun arbeidscontract verbreken omdat zij hun salaris te laag zouden vinden. Aangezien de salarissen van de vissers kosten van de bedrijfsvoering zijn, is deze directe subsidie voor de vissers dus indirect steun voor de bedrijfsvoering van de betrokken vissersondernemingen. Dergelijke steun is op grond van punt 1.2, vierde alinea, derde streepje, van de richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

<sup>(6)</sup> PB C 334 van 12.12.1995, blz. 4.

III.5. Feit is dat Nederland voornemens is een plan capaciteitsvermindering zeevisserij uit te voeren, dat aan de Commissie is gemeld op grond van artikel 88 van het EG-Verdrag en dat momenteel door de Commissie wordt onderzocht onder nr. N 80/2001. Men kan zich dus afvragen of deze subsidie niet kan worden ingepast in de herstructurering van de vissersvloot die door de Nederlandse autoriteiten wordt uitgevoerd en of deze subsidie in dat geval niet als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt zou kunnen worden aangemerkt. Het oordeel terzake moet echter, zoals zal worden aangetoond, negatief zijn.

Dit plan is namelijk allereerst bedoeld om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgesteld in de beschikking van 16 december 1997 houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Nederland voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001 <sup>(7)</sup>, gewijzigd bij de beschikking van 21 december 2000 <sup>(8)</sup>. Voorts wordt, zoals reeds is opgemerkt, de subsidie aan de vissers toegekend aan alle maatschapsvissers zonder onderscheid, dus ook zonder onderscheid aan alle vissersbedrijven waar het bijbehorende beloningsstelsel wordt toegepast, d.w.z. de overgrote meerderheid van de vissersbedrijven, en zonder dat rekening wordt gehouden met hun financiële situatie. Voorts zal deze subsidieregeling worden uitgevoerd in de loop van het jaar 2001, terwijl de terugbetaling van de premies betrekking heeft op de premies die in de loop van het jaar 2000 zijn betaald.

Derhalve bestaat er geen verband tussen de subsidie aan de vissers en het programma capaciteitsvermindering zeevisserij dat in de loop van het jaar 2001 zal worden uitgevoerd.

Deze subsidie is duidelijk een conjuncturele steunmaatregel die los staat van het voorgenomen plan van de Nederlandse autoriteiten voor vermindering van de capaciteit van de zeevisserij. Het indirecte effect ten gunste van de visserijbedrijven is, om een voorbeeld te noemen, niet gerelateerd aan ondernemingen in moeilijkheden waarvoor reddings- en herstructureringssteun vastgesteld zou zijn. Als dat het geval was geweest, had deze subsidie onderzocht kunnen worden in het licht van de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden <sup>(9)</sup>, overeenkomstig punt 2.2.4 van de richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector. Maar dit is niet het geval en, ook uit dat oogpunt, is deze steunregeling onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

III.6. Er bestaat bijgevolg, in dit stadium van de eerste beoordeling als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 659/1999, ernstige twijfel over de verenigbaarheid van deze steunregeling met de richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector en, bijgevolg ook, met het EG-Verdrag.

Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie Nederland in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag binnen een maand vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen kenbaar te maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de beoordeling van de steunmaatregel. Zij verzoekt de Nederlandse autoriteiten onverwijld een afschrift van deze brief aan de potentiële begunstigden van de steunmaatregel te doen toekomen.»

<sup>(7)</sup> PB L 39 van 12.2.1998, blz. 15.

<sup>(8)</sup> PB L 5 van 10.1.2001, blz. 10.

<sup>(9)</sup> PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.

## AYUDAS ESTATALES

**Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 15/2001 (ex NN 11/2000) — Ayuda de reestructuración a Ambau GmbH Stahl- und Anlagenbau Sperenberg**

(2001/C 179/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 13 de marzo de 2001, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Competencia  
Dirección H-1  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax (32-2) 296 95 79.

Dichas observaciones serán comunicadas a Alemania. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

## RESUMEN

**Procedimiento**

Mediante carta de 29 de diciembre de 1999, registrada el 10 de enero de 2000, las autoridades alemanas presentaron información referente a medidas de ayuda a Ambau GmbH Stahl- und Anlagenbau Sperenberg (en adelante Ambau). La ayuda se concedió para una nueva unidad empresarial de Ambau en Gräfenhainichen, Sajonia-Anhalt.

**Descripción de las medidas**

Después de ser el taller central de la minería del lignito, Anhaltiner Stahl- und Anlagenbau AG, una empresa de la Treuhand, fue privatizada mediante venta en 1992. En el contexto de la privatización se benefició de una ayuda de 7,293 millones de marcos alemanes de THA. Sin embargo tuvo que ser declarada en quiebra en mayo de 1997.

El 4 de diciembre de 1997 el administrador judicial arrendó los activos al nuevo inversor Ambau. Ambau es una PYME<sup>(1)</sup> situada en Brandeburgo, y es propiedad de los Sres. Görlitz. Produce equipos para la industria siderúrgica y de construcciones técnicas. En enero de 1998 GSA Grundstücksfond Sajonia-

Anhalt (en adelante «GSA»), una entidad pública, se hizo cargo del terreno por un precio de 1 marco alemán y de la maquinaria por un precio de 1,5 millones de marcos alemanes. Posteriormente, el nuevo propietario de GSA y el inversor llegaron a un acuerdo sobre otro contrato de alquiler. Al mismo tiempo Ambau ofreció a 100 empleados un nuevo contrato, que 92 aceptaron. Originalmente los activos debían transferirse a una entidad recientemente creada, legalmente separada del inversor. Sin embargo, a petición de los acreedores los activos se organizaron en forma de una unidad empresarial dentro de Ambau sin personalidad jurídica separada<sup>(2)</sup>.

La reestructuración se basa en un plan creado por los expertos independientes en 1998 y que cubre desde principios de 1998 hasta el 2001. La unidad empresarial funcionaría como proveedor para generadores de electricidad, especialmente torres para energía eólica. Además produciría equipo para la industria metalúrgica y química.

Los costes de reestructuración ascienden a 11,249 millones de marcos alemanes e incluyen el incremento del activo circulante de 5,572 millones de marcos alemanes, una línea de garantía de 4 millones de marcos alemanes, que es imprescindible en la industria en cuestión, e inversiones en maquinaria y edificios de 1,677 millones de marcos alemanes.

<sup>(1)</sup> Véanse las Directrices comunitarias sobre ayuda estatal a las PYME, (DO C 213 de 27.7.1996, p. 4).

<sup>(2)</sup> A efectos de esta carta el término «Ambau» hace referencia a la empresa en su conjunto, incluidas las dos unidades empresariales de Sperenberg y Gräfenhainichen. Por el contrario, el término «Gräfenhainichen» hace referencia a la propia unidad empresarial, sin perjuicio de la evaluación de la Comisión sobre su posibilidad de acogerse con arreglo a las directrices de reestructuración.



La reestructuración de Gräfenhainichen será apoyada por ambos poderes públicos, totalizando 8,845 millones de marcos alemanes (78,6 %), y por 2,404 millones del inversor (21,4 %). Los poderes públicos contribuyen: i) renunciando al cobro de un Massekredit de BvS de 1 millones de marcos alemanes; ii) subvencionando con 545 000 marcos alemanes con arreglo al Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; iii) mediante un préstamo consolidado de 500 000 marcos alemanes; iv) con una garantía del 80 % para un «Avalrahmen» de 4 millones de marcos alemanes; v) con el 80 % de las garantías para un préstamo BfG de 1,7 millones de marcos alemanes; vi) mediante una participación temporal de 1,5 millones de marcos alemanes; vii) mediante una garantía del 70 % para un préstamo del Deutsche Kreditbank, del cual el 44 % debe, en principio, considerarse como ayuda. El inversor es responsable de los préstamos garantizados, que totalizan 1,9 millones de marcos alemanes, mediante un aumento de capital de 300 000 marcos alemanes y un préstamo de Sparkasse de 204 000 marcos alemanes, garantizado por él mismo.

### Evaluación

En el contexto de su privatización la empresa en Gesamtvollstreckung se benefició de una condonación de préstamos por parte del accionista que totalizaban 7,293 millones de marcos alemanes. Esto se considera ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Sin embargo esta ayuda fue cubierta por el régimen de TH<sup>(3)</sup>. Como esta medida se concedió antes de la fase de reestructuración actual, no se tiene en cuenta para la evaluación de la proporcionalidad.

En la reestructuración Gräfenhainichen se benefició de medidas que totalizaban 8,845 millones de marcos alemanes. Estas medidas están calificadas como ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Sobre la base de la información proporcionada la Comisión no puede, sin embargo, excluir que el acuerdo de arriendo entre la entidad pública GSA y el inversor pudiera contener igualmente ayuda. Para verificar si este es el caso debe examinarse también la venta de activos a GSA en enero de 1998.

Aparte de la renuncia de BvS, todas las medidas de ayuda presumiblemente se basaron en sistemas. Las medidas ii) a v), totalizando 5,505 millones de marcos alemanes, parecen respetar el sistema y por lo tanto no serán valoradas de nuevo por la Comisión. Sin embargo se tendrán en cuenta al evaluar la proporcionalidad.

La garantía del 70 % para el préstamo de DKB se concedió originalmente al inversor antes de la compra pero se «desplazó» a Gräfenhainichen en 1999. La información proporcionada no es suficiente para evaluar el significado exacto de esta «transferencia». La Comisión, por lo tanto, ordena el envío de infor-

mación por lo que se refiere a esta medida, de conformidad con el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo.

Alemania invocó que la discreta participación temporal del Land, que totalizaba 1,5 millones de marcos alemanes, se basó en un sistema existente. Sin embargo el sistema en cuestión cubre exclusivamente préstamos. La Comisión por lo tanto ordena el envío de información por lo que se refiere a esta medida de conformidad con el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CE) n° 659/1999.

La renuncia de BvS (1 millón de marcos alemanes) no se basó en un sistema y debe ser estudiada por la Comisión conforme a las Directrices sobre ayuda estatal de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (en adelante, «las Directrices») en su versión de 1994<sup>(4)</sup>.

Es, sin embargo, cuestionable si Gräfenhainichen puede considerarse como una empresa en el sentido de las Directrices. Según lo ya mencionado antes, Gräfenhainichen no tiene personalidad jurídica, no es responsable único de sus compromisos ni está obligado por ellos. Los compromisos son firmados por Ambau y toda la empresa está entonces ligada por ellos. Teniendo esto cuenta la Comisión observa que Alemania nunca ha invocado que Ambau como tal experimente problemas. Habida cuenta de esta evaluación la Comisión iniciará el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE contra Ambau en su conjunto.

Incluso si Gräfenhainichen pudiera acogerse a la ayuda de reestructuración es cuestionable si se cumplen las condiciones. Sobre la base de la información presentada, la Comisión se pregunta si el plan puede restaurar la viabilidad de Gräfenhainichen. Según los documentos empresariales presentados se esperaba que Gräfenhainichen, después de las pérdidas iniciales en 1998, volviera a ser rentable en 1999. Se debe observar que la unidad empresarial está funcionando en un sector del mercado donde la demanda de garantías a largo plazo es, con aproximadamente el 15 % del volumen de negocios, bastante alta, lo que agrava el problema de liquidez. La Comisión reconoce que el inversor es una pequeña empresa que solamente tiene recursos limitados.

Según la información proporcionada, la capacidad seguirá siendo la misma y sólo se aumentará el grado de utilización. (. . .) (\*) Alemania, sin embargo, no ha proporcionado información suficiente sobre la situación de la capacidad tanto en el mercado europeo como en el mundial. Hasta que se proporcione tal información la Comisión no puede excluir la posibilidad de que el mercado tenga un exceso de capacidad y que puede necesitarse reducir en consecuencia la capacidad de Gräfenhainichen.

<sup>(3)</sup> Régimen THA E 15/92, SG(92) D/17613 de 8.12.1992

<sup>(4)</sup> DO C 368 de 23.12.1994, p. 12.

(\*) Secreto comercial

La información recibida no aclara si la ayuda es proporcional según lo establecido en las Directrices. Fundamentalmente la Comisión se pregunta si la contribución del 21,4 % invocada es significativa. Además el aumento de capital de 300 000 marcos alemanes parece conseguirse en parte mediante un sistema de acciones de Deutsche Ausgleichsbank, una entidad pública. La Comisión observa que la información proporcionada no es suficiente para excluir que todo o parte de los 300 000 marcos alemanes deba ser considerada como ayuda a la reestructuración. El préstamo de Sparkasse Teltow (204 000 marcos alemanes) se había concedido inicialmente al inversor, pero «se transfirió» a Gräfenhainichen en 1999. Sobre la base de la información proporcionada, la Comisión es incapaz de evaluar el significado de esta «asignación». Si estas reservas se confirman, el inversor solamente contribuiría con 1,864 millones de marcos alemanes, o sea, el 16,6 %, lo que parece no ser significativo.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 puede reclamarse al beneficiario la devolución de toda ayuda ilegal.

## CARTA

«Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden übermittelten Auskünfte beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag zu eröffnen.

### 1. DAS VERFAHREN

- (1) Mit Schreiben vom 29.12.1999, das am 10.1.2000 unter der Nr. NN 11/2000 registriert wurde, übermittelte Deutschland Auskünfte über Beihilfemaßnahmen zugunsten der Ambau GmbH Stahl- und Anlagenbau Sperenberg (nachstehend „AMBAU“) mit. Die Beihilfen wurden für einen neuen Betriebsteil der AMBAU in Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt, gewährt.
- (2) Die Kommission ersuchte mit Schreiben vom 21.1., 9.3., 15.5. und 26.10.2000 um zusätzliche Auskünfte, die Deutschland mit Schreiben vom 4.4., 22.6. und 14.12.2000 erteilte.

### 2. BESCHREIBUNG

#### 2.1 Die Privatisierung

- (3) Der Anhaltiner Stahl- und Anlagenbau (nachstehend „ASTA“) wurde 1943 als die Zentralwerkstatt der deutschen Braunkohleindustrie gegründet. Diese Rolle behielt ASTA auch in DDR-Zeiten. 1990 ging ASTA in das Eigentum der Treuhandanstalt (nachstehend „THA“) über und wurde in eine GmbH umgewandelt. Das Unternehmen wurde am 6.5.1992 aufgrund eines Management-buy-out-Vertrags privatisiert. Im Rahmen dieser Privatisierung erhielt ASTA staatliche Beihilfen in Höhe von 7,293 Mio. DEM, indem die THA auf die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen verzichtete.

- (4) Die rückläufige Entwicklung des Braunkohlebergbaus zwang ASTA, seine Produktion zu rationalisieren. Das Unternehmen blieb zwar in der Produktion von Bergbaueinrichtungen tätig, richtete seine Tätigkeit aber u. a. auf den Bau von Gasleitungen und den maschinentechnischen Stahlbau aus. Mit einem Umsatz von 30 Mio. DEM erlitt das Unternehmen 1996 Verluste in Höhe von 7,5 Mio. DEM. Aus diesem Grunde musste am 1.5.1997 das Gesamtvollstreckungsverfahren eröffnet werden. Der Gesamtvollstreckungsverwalter hielt den Betrieb bis Ende 1997 aufrecht.

#### 2.2 Die Umstrukturierung

##### 2.2.1 Der neue Investor

- (5) Der neue Investor AMBAU hat seinen Sitz in Sperenberg, Brandenburg. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet, beschäftigt gegenwärtig 193 Mitarbeiter (davon 92 in Gräfenhainichen) und erzielte 1999 bei einer Bilanzsumme in Höhe von 18 Mio. DEM einen Umsatz von 27 Mio. DEM. Gesellschafter sind die Herren Görlitz (mit je 50 %). Das Unternehmen ist demnach ein KMU (?). Es ist als Zulieferer für den Stahl- und Anlagenbau tätig.

##### 2.2.2 Die Umstrukturierung

- (6) Am 4.12.1997 schlossen der Gesamtvollstreckungsverwalter und AMBAU einen Pachtvertrag für Gebäude, Maschinen, Ausrüstungen usw. des in Gesamtvollstreckung befindlichen Unternehmens. Zu diesem Zeitpunkt bot AMBAU 100 Mitarbeitern (von 270 anlässlich der Gesamtvollstreckung) einen neuen Vertrag an, der von 92 Mitarbeitern akzeptiert wurde.
- (7) Mit Vertrag vom 20.1.1998 erwarb die GSA Grundstücksfond Sachsen-Anhalt (nachstehend „GSA“), eine öffentliche Einrichtung, das Betriebsgrundstück für den Preis von 1 DEM und die Maschinen für 1,5 Mio. DEM. Deutschland übermittelte einen von unabhängigen Sachverständigen erstellten Bericht vom 16.12.1997, in dem dieser Maschinenwert bestätigt wurde. Es wird geltend gemacht, dass für das Grundstück allgemeingültige Marktindikatoren wegen der Ausdehnung (rund 300 000 m<sup>2</sup>), der vielen veralteten Gebäude und der problematischen Infrastruktur nicht verfügbar gewesen sind.
- (8) Mit Wirkung vom 1.10.1998 wurde zwischen der GSA und AMBAU für einen Teil des Grundbesitzes (123 606 m<sup>2</sup>) sowie für Gebäude, Maschinen und Ausrüstungen ein Mietvertrag geschlossen. Deutschland übermittelte diesen Vertrag in zwei Fassungen: eine Fassung vom 1.8.1998 mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem Mietzins von monatlich [...] (\*\*\*) und eine Fassung vom 4.5.1999 mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Mietzins von monatlich [...]. Auch hier erklärt Deutschland der Kommission, dass es keine Vergleichswerte gegeben hat. AMBAU trägt wie ein Eigentümer das wirtschaftliche Risiko, ist also z. B. für Versicherung und Wartungskosten verantwortlich.

(<sup>5</sup>) Siehe Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. C 213 vom 27.7.1996, S. 4).

(\*\*\*) Aus Gründen der Vertraulichkeit sind bestimmte Angaben aus dem Text entfernt worden. Diese Textstellen sind mit eckigen Klammern und Auslassungspunkten gekennzeichnet.

- (9) Die Kommission stellt fest, dass der neue Investor zunächst die Absicht hatte, die Vermögensbestände zu erwerben und diese auf ein neu gegründetes, rechtlich von AMBAU getrenntes Unternehmen zu übertragen. Auf Wunsch der Kreditgeber wurden die Vermögensbestände aber in Gestalt eines Betriebsteils ohne eigene Rechtspersönlichkeit innerhalb der AMBAU organisiert.
- (10) Für den Zweck dieses Schreibens ist mit dem Terminus „AMBAU“ das Unternehmen des Investors insgesamt, einschließlich der Betriebsteile in Sperenberg und Gräfenhainichen, gemeint. Demgegenüber wird der Ausdruck „Gräfenhainichen“ verwendet, um den Betriebsteil zu kennzeichnen, ohne dass sich hieraus Rückschlüsse für die Wertung der Kommission hinsichtlich dessen Förderfähigkeit aufgrund der Umstrukturierungsleitlinien ergeben.

### 2.2.3 Der Umstrukturierungsplan

- (11) Die Umstrukturierung beruht auf einem von den Herren Görlitz zusammen mit ergon consult 1998 in Angriff genommenen Plan. Dieser erstreckt sich auf einen Zeitraum von drei Jahren (1998 bis 2001). Um dem Managementdefizit des in der Gesamtvollstreckung befindlichen Unternehmens entgegenzuwirken, übernahmen die Herren Görlitz von AMBAU die Leitung. Zur Veränderung des Produktsortiments wird der neue Betrieb als Anbieter auf dem Markt für Kraftwerksanlagen tätig sein. Wegen der wachsenden Bedeutung erneuerbarer Energieträger sollen in Gräfenhainichen Komponenten für neue Technologien wie Windkraftanlagen hergestellt werden. Außerdem sollen in Gräfenhainichen Öfen für Metallurgie- und Chemiebetriebe montiert werden. Durch Synergien mit AMBAU wird das Auftragsvolumen zunehmen. Wettbewerber sind Stahlbau Ruhland, Stahlbau Plauen, SAM Magdeburg und Stahlbau Zwickel.
- (12) Die Notifizierung enthielt Angaben zum voraussichtlichen Ergebnis des Betriebs in Gräfenhainichen<sup>(6)</sup>. Die zuletzt erhaltenen Angaben über die tatsächliche Leistung betreffen allerdings nicht die beiden Betriebe getrennt, sondern das gesamte Unternehmen<sup>(7)</sup>.
- (13) Die Umstrukturierungskosten belaufen sich auf 11,249 Mio. DEM und setzen sich wie folgt zusammen:

(in Mio. DEM)	
Bestände	5,572
Avalrahmen	4,000
Ersatz von Maschinen und Instandsetzungsarbeiten (Heizungsanlage, Elektroinstallation) <sup>(*)</sup>	1,677
<b>Insgesamt</b>	<b>11,249</b>

(\*) Die Instandsetzungskosten werden vom Investor getragen.

- (14) Die Investitionen in Höhe von 5,572 Mio. DEM sind für den Aufbau von Beständen erforderlich, insbesondere von Rohmaterial im Hinblick auf einen schnellen Beginn und Abschluss der Bauaufträge. Die deutschen Behörden haben nachgewiesen, dass derartige Bestände im Anlagenbau wesentlich sind.

<sup>(6)</sup> Siehe Schreiben vom 29.12.1999, S. 4, sowie Schreiben vom 4.4.2000 (Anlage 10).

<sup>(7)</sup> Siehe Schreiben vom 14.12.2000, Bericht der Abator Treuhand GmbH vom 10.11.2000.

- (15) Um auftragsbedingte Sicherheiten bieten zu können, wurde ein Avalrahmen von 4 Mio. DEM bereitgestellt. Im Anlagenbau ist es üblich, dass sich die Banken für rund 15 % des Auftragswerts sofort bei Vertragsabschluss verbürgen.
- (16) Die Umstrukturierung in Gräfenhainichen wird wie folgt von den Behörden und dem Investor finanziert:

	Staat	Mio. DEM	Investor	Mio. DEM
1	BvS-Darlehensverzicht	1,000	Kapitalerhöhung	0,300
2	„Gemeinschaftsaufgabe“	0,545	Darlehen der Sparkasse Teltow	0,204
3	80%ige Bürgschaft (Avalrahmen von 4 Mio.)	3,200	Eigenobligo 20 %	0,800
4	80%ige Bürgschaft (zwei BfG-Darlehen von 1,7 Mio.)	1,260	Eigenobligo 20 %	0,440
5	56%ige Bürgschaft (DKB-Darlehen von 1,5 Mio.)	0,840	Eigenobligo 44 %	0,660
6	stille Beteiligung von 1,5 Mio.	1,500		
7	Konsolidierungsdarlehen von 0,5 Mio.	0,500		
	<b>Insgesamt</b>	<b>8,845</b> = 78,6 %	<b>Insgesamt</b>	<b>2,404</b> = 21,4 %

- (17) Der Staat beteiligt sich mit folgenden Maßnahmen an der Umstrukturierung:
- 1. Maßnahme: Verzicht auf die Rückzahlung von Darlehen in Höhe von 1 Mio. DEM. Zwischen Mitte 1997 und April 1998 erhielt der Gesamtvollstreckungsverwalter von der BvS diesen Massekredit. Ursprünglich sollte der Kredit bis Juli 1999 getilgt werden, wurde aber im August 1998 verlängert. Mitte 1998 vereinbarten die BvS und der Verwalter, das Darlehen auf den Investor zu übertragen, der inzwischen die Vermögensbestände gepachtet hatte.
  - 2. Maßnahme: Investitionszuschüsse in Höhe von 545 000 DEM aufgrund der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, 27. Rahmenplan, einer von der Kommission genehmigten Regelung (C 84/98 SG(99) D/3472 vom 17.5.1999).
  - 3. Maßnahme: Der Avalrahmen von 4 Mio. DEM der Deutschen Kreditbank (nachstehend „DKB“) wird durch eine 80%ige Bürgschaft des Landes aufgrund der Bürgschaftsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt gesichert, einer von der Kommission genehmigten Regelung (N 431/91 SG(91) D/15633 vom 8.8.1991).
  - 4. Maßnahme: Die beiden Darlehen von insgesamt 1,7 Mio. DEM der Bank für Gemeinwirtschaft (nachstehend „BfG“) zum Marktzinssatz wird durch eine 80%ige Bürgschaft des Landes aufgrund der Bürgschaftsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt gesichert, einer von der Kommission genehmigten Regelung (N 431/91 SG(91) D/15633 vom 8.8.1991).

- **5. Maßnahme:** Das DKB-Darlehen von 1,5 Mio. DEM zum Marktzinssatz wird durch eine 70%ige Bürgschaft des Landes aufgrund des Programms für unmittelbare Bundesgarantien gesichert, einer von der Kommission genehmigten Regelung (N 297/91, SG(91) D/13344 vom 15.8.1991) <sup>(8)</sup>. In der Anmeldung wurde erklärt, dass die Bürgschaft lediglich eine Intensität von 56 % des verbürgten Betrages hat. Die Kommission stellt fest, dass diese Sicherheit zunächst dem Investor 1996 (vor der Übernahme) gewährt wurde bevor sie im Juni 1999 dem Betriebsteil in Gräfenhainichen zugeordnet wurde.
  - **6. Maßnahme:** Das Konsolidierungsdarlehen von 500 000 DEM beruht auf der Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen an mittelständische Unternehmen in Sachsen-Anhalt, einer von der Kommission genehmigten Regelung (N 452/97, SG(97) D/9273 vom 10.11.1997).
  - **7. Maßnahme:** Die vorübergehende stille Beteiligung von 1,5 Mio. DEM der Wagnisbeteiligungsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt beruht auf der Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen an mittelständische Unternehmen in Sachsen-Anhalt, einer von der Kommission genehmigten Regelung (N 452/97, SG(97) D/9273 vom 10.11.1997).
- (18) Der Investor beteiligt sich mit folgenden Maßnahmen an der Umstrukturierung:
- Eine Kapitalerhöhung von 300 000 DEM. Die Kommission stellt fest, dass diese Erhöhung zum Teil mit Mitteln der Deutschen Ausgleichsbank (nachstehend „DtA“), einer öffentlichen Bank, erfolgt.
  - Ein vom Investor verbürgtes Darlehen der Sparkasse Teltow zu Marktbedingungen in Höhe von 240 000 DEM. Die Kommission stellt fest, dass dieses Darlehen 1996 dem Investor gewährt wurde, anschließend aber im Juni 1999 dem Betrieb in Gräfenhainichen zugeordnet wurde.
  - Die Beteiligung des Investors an den verbürgten Darlehen beläuft sich insgesamt auf 1,9 Mio. DEM, einschließlich einer 20%igen Verbindlichkeit für die BfG-Darlehen und den Avalrahmen sowie einer 44%igen Verbindlichkeit für das DKB-Darlehen.

(19) Alle Maßnahmen wurden Mitte 1999 durchgeführt.

#### 2.2.4 Marktanalyse

- (20) Im Betrieb in Gräfenhainichen werden Ausrüstungen für Kraftwerksanlagen, insbesondere Windkraftanlagen hergestellt. Diese können als Maschinen für unspezifische Verwendung, einschließlich Maschinen für Kraftwerke, (NACE Rev. 1 29.1 und 29.2) eingestuft werden.

<sup>(8)</sup> Ausgangspunkt der Berechnung ist eine Intensität von 70 % der verbürgten Summe. Für die Bürgschaft hat der Staat eine 80%ige Rückbürgschaft übernommen, während der Bürgschaftsbank Potsdam ein Eigenobligo von 20 % verbleibt. Dieser Anteil entspricht 14 % des Risikos des ursprünglich verbürgten Betrags. Durch diese 14 % und das Eigenobligo von 30 % der den Kredit gewährenden Bank reduziert sich die ursprüngliche Intensität von 70 % der verbürgten Summe auf 56 %.

Außerdem stellt der Betrieb Komponenten für Metallurgie- und Chemiebetriebe her. Dabei handelt es sich um Maschinen für bestimmte Wirtschaftszweige (NACE Rev. 1 29.4 und 29.5). Die Nachfrage nach diesen Erzeugnissen hängt weitgehend von der Wirtschaftslage der zu beliefernden nachgelagerten Sektoren ab.

- (21) Den Informationen zufolge tragen die nachstehenden Bereiche wie folgt zu dem Umsatz von 18,5 Mio. DEM bei: Kraftwerksturbinen [...]; Windkraftanlagen [...]; Maschinen für die metallverarbeitende Industrie und den Maschinenbau sowie Reparaturen [...]. Zwischen 1998 und 1999 erwirtschaftete der Betrieb [...] seines Umsatzes in Deutschland und [...] im Ausland. Insbesondere das Geschäftsfeld Maschinen mit unspezifischer Verwendung ist stark exportorientiert, und zwar weitgehend außerhalb des Gemeinsamen Marktes.
- (22) Der Betrieb liefert Ausrüstungen für Kraftwerksanlagen an Unternehmen wie Siemens AG und Braden-Europe B.V. (NL). Außerdem werden in Gräfenhainichen Komponenten für Gasturbinensysteme gebaut. Mit einem voraussichtlichen Umsatz von rund [...] im Jahr 1999 ist der Anteil am Weltmarkt für Gasturbinen nicht signifikant genug, um ihn prozentual zu beziffern. Im „World energy outlook“ der Internationalen Energie-Agentur von 1998 wurde darauf hingewiesen, dass sich Nachfrage nach Gas im Energiemix rasch zunehmen wird. Hauptwettbewerber sind die Air System Barlage Vertriebs GmbH und Finow Rohrleitungssystem GmbH. Außerdem werden Türme für Windkraftanlagen gebaut. Für die in Deutschland seit Ende 1998 errichteten 1 500 Windkraftanlagen baute AMBAU 37 Türme, was einem Anteil am deutschen Markt von 2,5 % entspricht. In Statistiken des Bundesverbands Windenergie eV wurde in diesem Bereich ein Wirtschaftswachstum von 54 % genannt. Hauptwettbewerber sind Stahl und Apparatebau Magdeburg GmbH, Rheden Stell B.V. (NL) und Iemants & N.V. (B).
- (23) Zudem werden in Gräfenhainichen Ausrüstungen für in Metallurgie- und Chemiebetrieben verwendete Öfen hergestellt. In diesem Sektor beläuft sich der Marktanteil des Betriebes in Deutschland auf 0,089 %. Der Anteil am Gemeinsamen Markt ist nicht signifikant genug, um ihn prozentual zu beziffern. Hauptwettbewerber sind die Stahlbau Schauenburg GmbH, Dieball GmbH, Stahlbau Illingen GmbH und Hilgenfurth GmbH.

- (24) Nach den der Kommission übermittelten Angaben wird die Kapazität unverändert bleiben, die Auslastung jedoch — wie die nachstehende Tabelle zeigt — heraufgesetzt. Da Gräfenhainichen unterschiedliche Erzeugnisse herstellt, beruht die Berechnung auf den Laufstunden je Maschine.

	1998	2000	2001
Geplanter Umsatz (in Mio. DEM)	16,7	18,5	22
Laufstunden	77 918	86 025	96 250
Auslastung (in %)	79,7	88,2	97,8
Mitarbeiter	92	91	85

- (25) Bis dato hat die Kommission keine Informationen über die Marktsituation der AMBAU erhalten.

## 3. WÜRDIGUNG

**3.1 Beihilfen im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag**

- (26) Im Rahmen der Privatisierung im Jahr 1992 verzichtete die THA auf die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 7,293 Mio. DEM. Im Zusammenhang mit der 1998 in Angriff genommenen Umstrukturierung erhielt Gräfenhainichen Maßnahmen von insgesamt 8,845 Mio. DEM.
- (27) Hierbei handelt es sich um Beihilfen im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag, da sie aus staatlichen Mitteln stammen. Der Betrieb in Gräfenhainichen hat im Übrigen auf diese Weise Vorteile erhalten, da seine eigentlichen Kosten aufgrund der Beihilfen reduziert wurden. Außerdem ist der Betrieb als Zulieferer im Anlagenbau tätig, einem Sektor, in dem innergemeinschaftlicher Handel besteht.
- (28) Die Informationen reichen nicht aus, um festzustellen, ob der Mietvertrag zwischen der GSA und dem Investor unter Marktbedingungen zustande gekommen ist. Im Rahmen der Umstrukturierung wurden zwei Transaktionen durchgeführt: Erst wurden die Vermögensbestände des in Gesamtvollstreckung befindlichen Unternehmens vom Gesamtvollstreckungsverwalter an die GSA verkauft, und anschließend vermietete die GSA die betreffenden Vermögensbestände an den Investor. Zunächst muss die Kommission prüfen, ob der Mietvertrag staatliche Beihilfen enthält. Zu diesem Zweck müssen allerdings beide Verträge untersucht werden. Die Kommission stellt fest, dass die GSA der LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen (nachstehend „LEG“) gehört, bei der es sich um eine öffentliche Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen handelt. In Bezug auf das Grundstück müssen daher beide Verträge aufgrund der Mitteilung der Kommission betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten oder Grundstücken durch die öffentliche Hand von 1997<sup>(9)</sup> gewürdigt werden. Die bisherigen Informationen reichen allerdings nicht aus, um diese Würdigung durchzuführen. Die deutschen Behörden haben zwei Mietverträge zwischen der GSA und dem Investor vorgelegt, die sich sowohl in Bezug auf die Laufzeit als auch in Bezug auf den Mietzins unterscheiden.
- (29) Deswegen kann die Kommission anhand der ihr vorliegenden Informationen nicht ausschließen, dass der Mietvertrag zwischen der GSA und dem Investor Beihilfen zugunsten des Investors enthält.

**3.2 Beihilfen aufgrund von THA-Beihilferegimen im Rahmen der Privatisierung**

- (30) Im Rahmen der Privatisierung von 1992 wurde auf die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen in Höhe von 7,293 Mio. DEM, die die THA gewährt hatte, verzichtet. Deutschland macht geltend, dass diese Beihilfen von dem 1992 genehmigten THA-Beihilferegime<sup>(10)</sup> abgedeckt gewesen sind. Bei der Prüfung von Maßnahmen, die vorgeblich in den Anwendungsbereich einer bestehenden Beihilferegelung fallen, muss die Kommission vor Eröffnung des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag prü-

fen, ob die Beihilfe die in der Regelung niedergelegten Modalitäten erfüllt<sup>(11)</sup>. Da der Verzicht mit der Regelung vereinbar ist, braucht er von der Kommission nicht erneut gewürdigt zu werden, und da er außerdem gewährt wurde, bevor die jetzige Umstrukturierungsphase 1998 begann, wird die Kommission diesen Betrag bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe nicht berücksichtigen.

**3.3 Beihilfen im Rahmen der Umstrukturierung****3.3.1 Beihilfen aufgrund genehmigter Regelungen**

- (31) Abgesehen von der 1. Maßnahme beruhen scheinbar alle Maßnahmen, die sich auf insgesamt 7,845 Mio. DEM belaufen, auf genehmigten Regelungen. Bevor die Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag eröffnet, muss sie feststellen, ob die Maßnahmen, die angeblich aufgrund einer genehmigten Regelung gewährt werden, den Modalitäten dieser Regelung entsprechen<sup>(12)</sup>.
- (32) Die 2., die 3., die 4. und die 7. Maßnahme in Höhe von insgesamt 5,505 Mio. DEM entsprechen offensichtlich den in der jeweiligen Beihilferegelung niedergelegten Bedingungen und werden daher von der Kommission nicht erneut gewürdigt. Bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit werden sie allerdings berücksichtigt werden.
- (33) Hinsichtlich der 5. Maßnahme wurde der Kommission mitgeteilt, dass die 70%ige Bürgschaft für das DKB-Darlehen von 1,5 Mio. DEM dem Investor vor der Übernahme eingeräumt, anschließend aber im Juni 1999 dem Betrieb in Gräfenhainichen „zugeordnet“ wurde. Deutschland hat nicht genügend Angaben gemacht, um die genaue Bedeutung dieses „Transfers“ zu würdigen und festzustellen, ob dieser Vorgang in den Anwendungsbereich des genannten Programms fällt. Daher ordnet die Kommission aufgrund von Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung Nr. 659/1999 an, dass ihr über diese Maßnahme Auskünfte erteilt werden.
- (34) In Bezug auf die 6. Maßnahme macht Deutschland geltend, dass die stille Beteiligung der Wagnisbeteiligungsgesellschaft Land Sachsen-Anhalt in Höhe von 1,5 Mio. DEM ebenfalls auf einer bestehenden Regelung beruht<sup>(13)</sup>. Diese Regelung sieht allerdings ausschließlich Darlehen vor<sup>(14)</sup>. Die Informationen reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Beihilfe in den Anwendungsbereich der fraglichen Regelung fällt. Deswegen ordnet die Kommission auch für diese Maßnahme aufgrund von Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung Nr. 659/1999 an, dass ihr Auskünfte erteilt werden.

**3.3.2 Freistellung aufgrund von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag**

- (35) Die 1. Maßnahme, nämlich der Verzicht auf die Rückzahlung eines Darlehens der BvS (1 Mio. DEM), beruht nicht auf einer bestehenden Regelung und muss von der Kommission gewürdigt werden.

<sup>(11)</sup> EuGH, Urteil vom 5.10.1994, C-47/91 Italien gegen Kommission (1994), Slg. 4635.

<sup>(12)</sup> EuGH, Urteil vom 5.10.1994, C-47/91, Italien gegen Kommission (1994), Slg. 4635.

<sup>(13)</sup> N 452/97, SG(97) D/9273 vom 10.11.1997.

<sup>(14)</sup> Siehe Punkt 10 der Anmeldung vom 18.6.1997.

<sup>(9)</sup> ABl. C 209 vom 10.7.1997, S. 3.

<sup>(10)</sup> THA-Beihilferegime E 15/92, SG(92) D/17613 vom 8.12.1992.

- (36) Eine Beihilfe dieser Art ist generell mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, es sei denn, dass sie aufgrund von Artikel 87 EG-Vertrag freigestellt werden kann. Im vorliegenden Fall ist Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag anwendbar, da die Anmeldung der deutschen Behörden Umstrukturierungsbeihilfen betraf.
- (37) Die Kommission stützt ihre Prüfung auf die Kriterien in den Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (nachstehend „die Leitlinien“) von 1994<sup>(15)</sup>. Die Leitlinien von 1994 gelten für nicht angemeldete Beihilfen, wenn diese vor Veröffentlichung der neuen Leitlinien von 1999 an ein KMU gewährt wurden, was in diesem Fall zutrifft<sup>(16)</sup>. In den Leitlinien wurde festgelegt, unter welchen Bedingungen die Kommission die Würdigung nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag vornehmen kann.
- 3.3.2.1 *Förderfähigkeit im Rahmen der Umstrukturierungsleitlinien*
- (38) Gemäß Ziffer 2.1 der Leitlinien muss es sich bei dem Beihilfeempfänger um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handeln.
- (39) Ausgehend von einer wirtschaftlichen Interpretation des Begriffs ist Deutschland der Meinung, dass untersucht werden muss, ob AMBAU mit dem Betriebsteil in Gräfenhainichen eine wirtschaftliche Einheit bildet. Da Deutschland hierbei zu dem Ergebnis kommt, daß AMBAU diesem Betriebsteil gegenüber keinerlei Weisungsbefugnis hat, ist es der Auffassung, daß nur Gräfenhainichen Empfänger der Beihilfen ist. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass abgesehen von unterschiedlichen Standorten der Betriebsteil in Gräfenhainichen und der andere Betrieb von AMBAU auch unterschiedliche Tätigkeiten ausüben. Seit 1999 erfolge überdies eine getrennte Buchführung. Deutschland verweist zur Unterstützung seiner Position auf die Genehmigung der Kommission in der Sache Rackwitz Aluminium GmbH<sup>(17)</sup>.
- (40) Wie weiter oben erwähnt wurde, verfügt der Betrieb in Gräfenhainichen über keine Rechtspersönlichkeit. Gräfenhainichen haftet nicht allein für seine Verbindlichkeiten. Zuständig für die Mietverträge über Grundbesitz und Maschinen, die Einstellung von Personal und die Aufnahme von Darlehen usw. ist AMBAU. Somit haftet das gesamte Unternehmen. Diese letztendliche Haftung von AMBAU war einer der Gründe, der die Banken veranlasst hat, auf die Organisation in Gestalt eines Betriebsteils anstelle einer selbständigen rechtlichen Einheit zu drängen. In diesem Zusammenhang ist das von den deutschen Behörden vorgebrachte Argument der gesonderten Buchführung unerheblich. Im Übrigen stellt die Kommission fest, dass in der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1999 gerade nicht zwischen den beiden Betrieben unterschieden wird.
- (41) Der von den deutschen Behörden erwähnte Präzedenzfall Rackwitz trifft auf den vorliegenden Fall nicht zu. Im Fall Rackwitz wurden Beihilfen einem Unternehmen in der Gesamtvollstreckung befindlichen, also einer selbstständigen rechtlichen Einheit gewährt, bevor dessen Tätigkeiten von dem späteren Investor übernommen wurden. Dies unterscheidet ihn vom vorliegenden Fall.
- (42) Deswegen ist es zweifelhaft, ob Gräfenhainichen als ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien angesehen werden kann.
- (43) Vor diesem Hintergrund stellt die Kommission fest, dass Deutschland nie von etwaigen Problemen bei AMBAU gesprochen hat. AMBAU erlitt 1998 Verluste in Höhe von 2,745 Mio. DEM gegenüber einem Gewinn von 81 695 DEM im Jahr 1997. Es wird jedoch behauptet, dass die Verluste ausschließlich auf die Kosten für die Umstrukturierung von Gräfenhainichen zurückzuführen sind. 1999 wurde erneut ein Gewinn von 762 934 DEM erzielt.
- (44) Aus diesen Gründen wird die Kommission gegen das gesamte Unternehmen AMBAU das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag eröffnen.
- 3.3.2.2 *Wiederherstellung der Rentabilität auf der Grundlage eines zusammenhängenden Plans*
- (45) Aus den vorgenannten Gründen, ist es zweifelhaft ob Gräfenhainichen überhaupt für Umstrukturierungsbeihilfen in Betracht kommt. Aber selbst wenn die Umstrukturierungsleitlinien anwendbar sein sollten, bezweifelt die Kommission, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.
- (46) Gemäß Ziffer 3.2.2 i) der Leitlinien muss ein Plan unterbreitet werden, auf dessen Grundlage die Rentabilität des Beihilfeempfängers innerhalb eines angemessenen Zeitraums wiederhergestellt wird. Der Umstrukturierungsplan erstreckt sich von Anfang 1998 bis 2000, was als ein angemessener Zeitraum angesehen werden kann. Nach den vorliegenden Informationen wurde damit gerechnet, dass Gräfenhainichen nach anfänglichen Verlusten 1998 im Jahr 1999 wieder rentabel sein würde.
- (47) Gräfenhainichen ist in einem Marktsegment tätig, wo das Erfordernis zur Bestellung von Sicherheiten über einen längeren Zeitraum mit rund 15 % des Umsatzes relativ hoch ausfällt; hierdurch erhöht sich der Liquiditätsbedarf des Unternehmens. Die Kommission weiß, dass es sich bei den Investoren um ein kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern handelt, das nur begrenzte Ressourcen aufweist. Mit einem jährlichen Umsatz von ca. 10 Mio. DEM, hat das Unternehmen zwischen Gründung 1993 und der Übernahme 1997 einen Gewinn von insgesamt 20 275 DEM erwirtschaftet. Die Kommission bemerkt, dass sich die Eigenkapitalquote des Investors per 31.3.1997 (vor der Übernahme von Gräfenhainichen) auf [...] belief und sich hiernach auf [...] reduziert hat.
- (48) Aufgrund der vorliegenden Informationen ist zweifelhaft, ob der Plan ausreicht, um die Rentabilität des Betriebs in Gräfenhainichen wiederherzustellen.

<sup>(15)</sup> ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12.

<sup>(16)</sup> Siehe Ziffer 101 der neuen Leitlinien (AbI. C 288 vom 9.10.1999, S. 2).

<sup>(17)</sup> NN 76/98, SG(98) D/12425 vom 30.12.1998.

### 3.3.2.3 Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen

- (49) Den Leitlinien zufolge dürfen die Beihilfen den Wettbewerb nicht in einer unzumutbaren Weise verfälschen. In Ziffer 3.2.2 ii) heißt es, dass bei Überkapazitäten in dem betreffenden Sektor der Umstrukturierungsplan eine Herabsetzung der Kapazität des Beihilfeempfängers vorsehen muss. Außerdem darf die Beihilfe nur zur Wiederherstellung der Rentabilität des Unternehmens und nicht zu einer Ausweitung seiner Produktionskapazität während der Durchführung des Umstrukturierungsplans verwendet werden.
- (50) In Gräfenhainichen werden Maschinen für Kraftwerke, insbesondere für Windkraftanlagen, hergestellt. Der Anteil des Betriebs am deutschen Turbinenmarkt beläuft sich auf weniger als 1 %, und sein Weltmarktanteil ist nicht signifikant genug, um ihn prozentual zu beziffern. Der Bau von Maschinen für Windkraftanlagen ist ein Wachstumsmarkt, an dem AMBAU in Deutschland mit 2,5 % beteiligt ist. Was die Herstellung von Ausrüstungen für Metallurgie- und Chemiebetriebe betrifft, so beläuft sich der Marktanteil in Deutschland auf weniger als 1 % und ist bezogen auf den Gemeinsamen Markt unerheblich. Die Kommission stellt fest, dass AMBAU ein KMU in einem Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag ist. Wie weiter oben erwähnt wurde, wird bei unveränderten Kapazitäten der Auslastungsgrad heraufgesetzt.
- (51) Der Betriebsteil will seine Produkte europa- und weltweit anbieten. Die deutschen Behörden haben indessen nicht genügend Informationen über die Kapazitäten auf dem europäischen und dem Weltmarkt vorgelegt. Ohne diese Informationen kann die Kommission nicht ausschließen, dass auf dem Markt Überkapazitäten bestehen und dass die Kapazität in Gräfenhainichen entsprechend herabgesetzt werden muss.

### 3.3.2.4 Verhältnismäßigkeit der Beihilfe

- (52) Gemäß Ziffer 3.2.2 iii) der Leitlinien muss sich die Beihilfeintensität auf das für die Umstrukturierung notwendige Mindestmaß beschränken. Anhand der Informationen ist nicht klar, ob der Investorbeitrag erheblich ist und ob folglich die Beihilfe in Übereinstimmung mit den Leitlinien als verhältnismäßig angesehen werden kann. In der Tabelle weiter oben wurde ein Beitrag von 21,4 % angegeben. Die Kommission bezweifelt, dass dies ein erheblicher Beitrag ist.
- (53) Zwei Elemente dieses Beitrags von 21,4 % sind außerdem zweifelhaft:
- Die Kapitalerhöhung von 300 000 DEM wird offensichtlich zum Teil aufgrund eines Eigenkapitalhilfeprogramm der Deutschen Ausgleichsbank (DtA) durchgeführt<sup>(18)</sup>. Die DtA ist eine staatliche Einrichtung

zur Förderung von KMU. Deswegen fragt sich, ob dieser Betrag als Investorbeitrag berücksichtigt werden sollte. Die Kommission stellt fest, dass anhand der Informationen nicht ausgeschlossen werden kann, dass der gesamte oder ein Teil des Betrags von 300 000 DEM als Umstrukturierungsbeihilfe anzusehen ist.

- Was das Darlehen der Sparkasse Teltow (204 000 DEM) betrifft, so stellt die Kommission fest, dass dieses Darlehen ursprünglich Mitte 1996 dem Investor gewährt, anschließend aber im Juni 1999 nach Gräfenhainichen „transferiert“ wurde<sup>(19)</sup>. Anhand der vorliegenden Informationen kann die Kommission nicht feststellen, welche Bedeutung diese „Zuweisung“ hat. Deswegen fragt sie sich, ob dieser Betrag berücksichtigt werden kann.

- (54) Sollten sich diese Zweifel bestätigen, würde der Investor lediglich mit 1,864 Mio. DEM bzw. 16,6 % zur Umstrukturierung beitragen. Es fragt sich, ob dies als ein erheblicher Beitrag angesehen werden kann, zumal der verbleibende Investorenbeitrag dann in dem Eigenobligo für die verbürgten Kredite bestünde.

### SCHLUSS

- (55) Aus diesen Gründen ist zweifelhaft, dass Gräfenhainichen ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien ist und in den Genuss von Umstrukturierungsbeihilfen gelangen kann. Auch wenn die Leitlinien anwendbar wären, bezweifelt die Kommission, dass die langfristige Rentabilität des Beihilfeempfängers aufgrund des vorliegenden Umstrukturierungsplans wiederhergestellt werden kann, dass der Wettbewerb nicht in unzumutbarer Weise verfälscht wird und dass die Beihilfe angemessen ist. Sie bezweifelt folglich, dass die Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.
- (56) Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland auf, ihr innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens alle zur Beurteilung der Vereinbarkeit der Beihilfe sachdienlichen Unterlagen, Angaben und Daten zu übermitteln, insbesondere was die 70 %-Bürgschaft des Landes für den DKB-Kredit und die stille Beteiligung der Wagnisbeteiligungsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt betrifft. Anderenfalls wird die Kommission eine Entscheidung auf der Grundlage der ihr vorliegenden Elemente erlassen. Sie bittet die deutschen Behörden, dem etwaigen Empfänger der Beihilfe unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.
- (57) Die Kommission erinnert Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können».

<sup>(18)</sup> Siehe Schreiben vom 29.12.1999, S. 9.

<sup>(19)</sup> Siehe Schreiben vom 14.12.2000, S. 15.

## AYUDAS ESTATALES

**Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE y del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE, sobre las medidas de ayuda registradas con la referencia C 29/2001 (ex NN 21/2000) — Italia — Medidas a favor de los pescadores tras el alza del precio del gasóleo**

(2001/C 179/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 8 de mayo de 2001, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Pesca  
Dirección D — Unidad Jurídica  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax: (32-2) 295 19 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

## RESUMEN

Mediante un Decreto-ley de 26 de septiembre de 2000, modificado y convertido en ley mediante una Ley de 23 de noviembre de 2000, Italia adoptó medidas de varios tipos con el fin de compensar el aumento de los gastos de funcionamiento de los buques como consecuencia del alza del gasóleo: pago de una indemnización a tanto alzado, exención de cargas sociales y concesión de un crédito fiscal. El objetivo previsto de estas medidas es el mantenimiento del empleo de los marineros con la garantía del pago del salario mínimo contractual a los marineros embarcados.

Dado que algunas de estas medidas ya eran aplicables desde la entrada en vigor de la Ley (26 de noviembre de 2000), este expediente se transfirió del registro de las ayudas notificadas hacia el de las ayudas no notificadas.

Mediante un Decreto interministerial, comunicado en la fase de proyecto, se fija el importe de la indemnización a tanto alzado. Este importe varía en función de la potencia del buque. Es, por ejemplo, de 1 032 euros para los buques de 50 a 100 kw, de 2 840 euros para los de 200 a 300 kw o de 11 362 euros para los de más 700 kw. El presupuesto global para estas indemnizaciones asciende a 21 100 000 euros.

La exención de cargas sociales y el crédito fiscal pueden aplicarse en sustitución de la indemnización a tanto alzado descrita anteriormente pero el presupuesto previsto a tal fin es muy

reducido (154 937 euros) y no se precisa la duración de su aplicación.

Por el contrario, estas dos medidas (exención de cargas sociales y crédito fiscal) se aplicaron para el conjunto de la pesca costera (pesca a menos de 20 millas marinas de las costas) por un período de tiempo de dos meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley (26 de noviembre de 2000). Estas medidas corresponden a la ampliación a la pesca costera, por el período de tiempo de dos meses indicado, de las medidas definidas mediante la Ley de 27 de febrero de 1998 en favor de los barcos de pesca oceánica y de altura, medidas estudiadas en el ámbito del expediente NN 39/98 y que la Comisión había declarado compatibles con el mercado común.

El crédito fiscal se basa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas deducido de los salarios pagados al personal de a bordo. La exención de cargas sociales y la concesión de este crédito fiscal se atribuyen para el 70 % de los importes correspondientes al período de dos meses en cuestión. El presupuesto previsto es de 5 160 000 euros.

Estas medidas tienen como efecto mejorar la tesorería de las empresas, mediante el pago de indemnizaciones a tanto alzado, o disminuir los costes de producción que normalmente deberían sufragar, mediante la exención de las cargas sociales y la concesión de un crédito fiscal. Estas medidas tienen el carácter de ayudas de funcionamiento.



Estas medidas de ayuda deben analizarse de acuerdo con las Directrices para el examen de las ayudas de Estado en el sector de la pesca<sup>(1)</sup>. Según el principio general enunciado en estas Directrices, las ayudas de funcionamiento son incompatibles con el mercado común. A veces pueden admitirse excepciones pero las autoridades italianas no proporcionaron elementos que habrían permitido actuar en este sentido (por ejemplo, existencia de un plan de reestructuración de las empresas en cuestión).

Por otra parte, no pueden considerarse como ayudas al mantenimiento del empleo porque no se reúnen las condiciones exigidas por el apartado 22 de las Directrices sobre ayudas al empleo<sup>(2)</sup> (acontecimientos extraordinarios, reestructuración o reconversión de las empresas).

Por consiguiente, basándose en las Directrices antes citadas, la Comisión duda de la compatibilidad de estas medidas de ayuda con el mercado común.

Asimismo, recuerda los términos del artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, según el cual, en caso de adoptarse una decisión negativa, la Comisión decide que el Estado miembro adopte las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las sumas correspondientes.

## CARTA

«Con la presente la Comisión si pregia di informare il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle misure menzionate in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento formale di esame previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione di tale articolo<sup>(3)</sup>».

### I. Procedimento

I.1. Con lettera del 16 marzo 2000 il ministro delle Politiche agricole e forestali italiano Paolo De Castro ha informato il commissario Fischler in merito ad un progetto di legge del governo italiano che prevede l'introduzione di un credito d'imposta per il 2000 basato sul quantitativo di carburante consumato. Il testo del progetto di legge era allegato a tale lettera.

Il progetto è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con N 159/2000.

Di questo progetto si è discusso durante varie riunioni di lavoro organizzate dalla Commissione con le autorità italiane.

Una richiesta ufficiale di ulteriori chiarimenti è stata inoltre inviata alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera del 18 maggio 2000 trasmettendo il testo del progetto pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2000 sotto forma di decreto legge recante la stessa data.

Essendo le informazioni contenute in tale lettera insufficienti per poter esaminare il progetto e non essendo pervenute, da

parte delle autorità italiane, altre informazioni che indicassero in particolare se tale decreto legge era stato convertito in legge (in base alla Costituzione italiana un decreto legge deve essere convertito in legge entro un termine massimo di due mesi; in caso contrario esso decade automaticamente) è stata inviata alle autorità italiane una nuova richiesta di chiarimenti in data 6 luglio 2000.

I.2. Le autorità italiane hanno successivamente notificato, con lettera pervenuta alla Commissione il 26 settembre 2000, il testo di un nuovo progetto di decreto legge relativo a misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca. Esse indicavano inoltre che il precedente decreto legge, che era stato all'origine della registrazione quale aiuto di Stato, era stato sostituito dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del nuovo decreto legge.

Considerando che questo nuovo testo contiene disposizioni relative ad altre misure di aiuto (che riguardavano sia la pesca che gli autotrasporti) il regime di aiuto destinato a compensare gli effetti del rincaro dei carburanti nel settore della pesca è stato registrato, a decorrere dal momento della notifica, con N 159A/2000, mentre le altre misure sono state registrate con 159B, 159C e 159D/2000.

Le autorità italiane hanno successivamente trasmesso, con lettera del 2 ottobre 2000, il testo di tale decreto legge, recante data del 26 settembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 settembre e che doveva essere, come al solito, convertito in legge entro un termine di due mesi. Con lettera del 23 novembre sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in quanto la Commissione non sapeva ancora, a tale data, se il decreto legge fosse stato effettivamente convertito in legge oppure fosse decaduto e dato che le disposizioni contenute in tale testo costituivano solamente un quadro generale, che presupponeva l'adozione di disposizioni d'applicazione.

La legge di conversione, recante la data del 23 novembre 2000 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 novembre, è stata trasmessa alla Commissione mediante lettera pervenuta il 20 dicembre 2000. Con tale legge vengono aggiunte, nel testo originale, disposizioni complementari a favore dei pescatori (nuovo paragrafo 5bis all'articolo 4). È stato inoltre trasmesso alla Commissione, con lettera pervenuta l'8 febbraio 2001, un progetto delle disposizioni d'applicazione del paragrafo 5, che figura in un decreto interministeriale.

Mentre le misure previste dal paragrafo 5 non sono state ancora attuate, in quanto lo saranno solamente dopo l'adozione definitiva del decreto interministeriale succitato, le misure di cui al paragrafo 5bis sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 26 novembre 2000. Per tale motivo questo dossier è stato trasferito nel registro degli aiuti non notificati con NN 21/2001.

### II. Descrizione

II. Le misure previste dal decreto legge del 26 settembre 2000, convertito in legge con la legge n. 343 del 23 novembre 2000, sono di tre tipi: indennità forfettaria, sgravio degli oneri sociali e attribuzione di un credito d'imposta.

<sup>(1)</sup> DO C 19 de 20.1.2001, p. 7.

<sup>(2)</sup> DO C 334 de 12.12.1995, p. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

### II.1. Indennità forfettaria

Tale indennità forfettaria è prevista dall'articolo 4, paragrafo 5, della legge del 23 novembre 2000 e il relativo importo è stabilito da un decreto interministeriale comunicato dalle autorità italiane alla Commissione sotto forma di progetto. Essa è presentata come una misura sociale diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali in relazione al pagamento garantito del salario minimo contrattuale ai marinai imbarcati a bordo.

L'indennità forfettaria sarà concessa alle navi che soddisfano le seguenti condizioni:

- imbarcazione armata per almeno 75 giorni nel corso del 2000,
- imbarcazione che, alla data di entrata in vigore del decreto del 26 settembre 2000, non sia stata demolita o destinata ad altre attività,
- imbarcazione la cui licenza sia in corso di validità e non si trovi in una delle condizioni di sospensione prevista dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995,
- l'impresa di pesca ha erogato ai marittimi imbarcati il minimo monetario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'importo di questa indennità forfettaria è fissato nel seguente modo:

- 1 000 000 di ITL (516 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice fino a 25 kw,
- 1 500 000 ITL (774 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice con più di 25 kw e fino a 50 kw,
- 2 000 000 di ITL (1 032 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice con più di 50 kw e fino a 100 kw,
- 3 000 000 di ITL (1 549 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice con più di 100 kw e fino a 200 kw,
- 5 500 000 ITL (2 840 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice con più di 200 kw e fino a 300 kw,
- 8 000 000 di ITL (4 131 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice con più di 300 kw e fino a 400 kw,
- 13 500 000 ITL (6 972 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice con più di 400 kw e fino a 500 kw,
- 16 000 000 di ITL (8 263 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice con più di 500 kw e fino a 600 kw,
- 19 000 000 di ITL (9 812 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice con più di 600 kw e fino a 700 kw,
- 22 000 000 di ITL (11 362 EUR) per le imbarcazioni con potenza motrice con più di 700 kw.

Per queste indennità forfettarie è previsto uno stanziamento complessivo di 41 200 milioni di ITL (21,2 milioni di EUR).

### II.2. Sgravio degli oneri sociali e attribuzione di un credito d'imposta

Tali misure sono previste al tempo stesso dal paragrafo 5 dell'articolo 4 e dal paragrafo 5bis.

A norma del paragrafo 5, l'insieme di queste misure può essere applicato in alternativa all'indennità forfettaria precedentemente descritta, per una durata imprecisata. Il bilancio previsto a tal fine è, in confronto, assai ridotto (300 milioni di ITL, ovvero 154 937 EUR).

A norma del paragrafo 5bis tutte queste misure si applicano all'intera pesca costiera (pesca che si svolge a meno di 20 miglia marine dalle coste) per una durata di due mesi. Esse vengono presentate come dirette a salvaguardare l'occupazione dei marittimi e si applicano per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero a decorrere dal 26 novembre 2000. Il bilancio previsto è di 10 000 milioni di ITL (5,16 milioni di EUR).

Queste misure di sgravio degli oneri sociali e di attribuzione di un credito d'imposta erano state definite dalla legge n. 30 del 27 febbraio 1998 relativa a misure urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e la promozione dell'occupazione, legge alla quale fa riferimento la legge del 23 novembre 2000.

In base all'articolo 6bis della legge del 27 febbraio 1998, le imprese di pesca che operano al di là degli stretti (pesca oceanica) possono beneficiare delle disposizioni degli articoli 4 e 6 della suddetta legge, mentre quelle che esercitano l'attività di pesca al di là delle 20 miglia marine dalle coste e all'interno degli stretti (pesca mediterranea) ne beneficiano entro il limite del 70 %. La misura prevista all'articolo 4 corrisponde all'attribuzione di un credito d'imposta pari all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui salari versati al personale di bordo e quella prevista all'articolo 6 corrisponde allo sgravio degli oneri sociali. Queste misure di aiuto a favore della pesca erano state esaminate dalla Commissione nell'ambito del fascicolo aiuto di Stato NN 39/98 ed erano state dichiarate compatibili; il governo italiano ne era stato informato con lettera SG(98) D/9455 del 10 novembre 1998.

Sia per il paragrafo 5 che per il paragrafo 5bis lo sgravio degli oneri sociali e l'attribuzione di un credito d'imposta sono concessi alle stesse condizioni che per la pesca mediterranea, ovvero con uno sgravio del 70 % degli oneri sociali e l'attribuzione di un credito d'imposta pari al 70 % dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sui salari.

### **III. Valutazione**

III.1. Le misure in oggetto vanno valutate in base alle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura adottate dalla Commissione nel 1997<sup>(4)</sup>. Le linee direttrici adottate dalla Commissione il 29 novembre 2000<sup>(4)</sup> si applicano infatti solamente agli aiuti di Stato notificati a decorrere dal 1° gennaio 2001 (punto 3.4).

<sup>(4)</sup> GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

Queste misure d'aiuto sono state motivate dalle autorità italiane con il rincaro dei costi dei carburanti, che sembrerebbe avere, in Italia, ripercussioni sul settore della pesca più gravi che negli altri Stati membri.

L'effetto di queste misure è quello di migliorare direttamente, mediante il versamento di indennità forfettarie, la situazione finanziaria delle imprese oppure di diminuire, mediante lo sgravio degli oneri sociali e l'attribuzione di un credito d'imposta, i costi di produzione che queste imprese dovrebbero normalmente sostenere. Queste misure hanno pertanto il carattere di aiuti al funzionamento.

III.2. In base al principio generale enunciato nelle linee direttrici succitate, gli aiuti al funzionamento sono incompatibili con il mercato comune (punto 1.2, ultimo comma). Possono essere previste talvolta eccezioni (ad esempio, l'esistenza di un piano di ristrutturazione delle imprese interessate), ma le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento d'informazione in questo senso. Gli aiuti sono infatti destinati all'intera flotta peschereccia italiana, a prescindere dalla situazione finanziaria delle imprese interessate.

Questi aiuti non possono essere neppure considerati come aiuti per la salvaguardia dell'occupazione, teoricamente compatibili con il mercato comune in applicazione del punto 22 delle linee direttrici sugli aiuti per l'occupazione <sup>(5)</sup>, in quanto non soddisfano le condizioni richieste. Gli aiuti non sono destinati ad ovviare a danni causati da calamità naturali o da altri eventi straordinari, poiché il rincaro dei prezzi dei carburanti è un fenomeno economico congiunturale. Essi non rientrano neppure, come è già stato precedentemente sottolineato, in un piano di ristrutturazione o di riconversione di imprese in difficoltà.

Non sussistono nemmeno le condizioni che aveva indotto la Commissione a dichiarare compatibili con il mercato comune le misure esaminate nell'ambito del fascicolo NN 39/98. Tali misure riguardavano infatti le flotte che operavano al di fuori delle acque territoriali e che, non esistendo una zona economica esclusiva nel Mediterraneo, sono direttamente confrontate con la concorrenza internazionale. La Commissione aveva approvato questo regime di aiuti che intendeva rimediare alla concorrenza internazionale, per evitare in particolare il trasferimento di navi italiane sotto la bandiera di paesi terzi.

III.3. Esistono pertanto, a questo stadio della valutazione preliminare prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, seri dubbi sulla compatibilità di queste misure di aiuto con le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura e, pertanto, con il trattato CE.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto in questione, entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari delle misure che sono già state attuate.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato, in caso di decisione negativa relativa ad un aiuto illegale, di adottare le misure necessarie presso i beneficiari.»

<sup>(5)</sup> GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

## AYUDAS ESTATALES

**Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 27/2001 (ex NN 2/2001) — Francia — Programa para el control de la contaminación de origen agrario (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole -PMPOA)**

(2001/C 179/05)

Por carta de 11 de abril de 2001, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Agricultura  
Dirección de Legislaciones Económicas Agrarias  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax (32-2) 296 21 51.

Dichas observaciones le serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

**RESUMEN**

Por carta de 31 de mayo de 2000, la Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea confirmó a la Comisión que el Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (Programa para el control de la contaminación de origen agrario), en lo sucesivo «PMPOA», venía existiendo desde 1994. En su momento, la Comisión no recibió notificación de este régimen como tal, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, sino que sólo fue informada de algunos elementos aislados del mismo que procedió a autorizar. No obstante, nunca le fueron notificados algunos aspectos relacionados con la participación de organismos públicos en la financiación de las ayudas. Por consiguiente, el régimen parece constituir una nueva ayuda concedida infringiendo el apartado 3 del artículo 88 del Tratado y, por tanto, una ayuda ilegal en virtud del Tratado.

La Comisión ha decidido incoar el procedimiento de examen previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado, en particular, en lo que respecta a la intensidad de las ayudas a la inversión otorgadas a las explotaciones beneficiarias del régimen.

**El PMPOA**

La finalidad del PMPOA es permitir que los agricultores adapten sus equipos y prácticas con objeto de lograr una mayor protección del medio ambiente y, en particular, de las aguas. Su objetivo concreto es lograr que se respete la Directiva 91/676/CEE del Consejo <sup>(1)</sup>, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos utilizados en la agricultura, así como las disposiciones nacionales orientadas a la introducción de un código de buenas prácticas agrarias.

A fin de ajustarse a las normas existentes al respecto y evitar la contaminación de los recursos hídricos con deyecciones de animales, se consideró necesario emprender obras para la mejora de las instalaciones de cría (del ganado bovino, porcino y avícola) y la gestión de efluentes. Por entonces, el coste de dichas obras, que se circunscribían a las instalaciones, se evaluó aproximadamente en 7 000 millones de francos franceses (aproximadamente 1 000 millones de euros) por un período que finalizaba en 2002. Se inició un programa de inversiones con arreglo a un plan de financiación que preveía la siguiente distribución: un tercio era aportado por los ganaderos, un tercio por el Estado (a través del Ministerio de Agricultura y Pesca) y el tercio restante por las agencias del agua. Como contrapartida, los ganaderos susceptibles de beneficiarse de las ayudas estaban sujetos al pago de un canon por contaminación que percibían las agencias del agua. El PMPOA se puso en práctica aplicando un enfoque sectorial, mediante el envío a los Prefectos de las regiones y departamentos de circulares del Ministerio de Agricultura y Pesca en la que se exponían las modalidades de la ayuda.

Para poder acogerse a las ayudas mencionadas, los productores tienen que presentar un estudio preliminar realizado, por encargo, por expertos técnicos autorizados, tras el cual se elabora el proyecto de inversión del productor. Este diagnóstico sirve de base para la elaboración de un contrato sobre control de la contaminación y, por consiguiente, para la determinación de los costes de inversión subvencionables por cada uno de los participantes en la financiación pública de las obras. Dichos estudios son financiados a partes iguales (50 % cada uno) por el Estado y las agencias del agua, sin rebasar la cifra límite de 6 000 francos franceses (914 euros), impuestos excluidos. Por lo que respecta este porcentaje de ayuda, la Comisión señala que, en el momento de ejecución de la ayuda, su práctica habitual era autorizar a los poderes públicos a financiar en este tipo de acciones el 100 % de los costes subvencionables. En efecto, la Comisión podía autorizar, en calidad de ayuda

<sup>(1)</sup> DO L 375 de 31.12.1991.

técnica a los ganaderos <sup>(2)</sup>, la asunción por parte del Estado de la totalidad de los costes de medidas tales como «las auditorías ambientales», consistentes en proyectos de seguimiento del impacto de las explotaciones ganaderas sobre el medio ambiente. Así pues, la Comisión concluye que el porcentaje de ayuda que las autoridades francesas han destinado a la realización de diagnósticos de explotación se ajusta a las normas de competencia aplicables.

### Las agencias del agua

Las agencias del agua son organismos públicos <sup>(3)</sup> dotados de personalidad jurídica y de autonomía financiera. Dependen del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Economía y Finanzas, y están dirigidas por un consejo de administración cuya composición es representativa de los distintos usuarios del agua. Las agencias dispensan asesoramiento técnico a los políticos, empresarios y agricultores, concediéndoles ayudas financieras destinadas a la realización de los trabajos necesarios para luchar contra la contaminación de las aguas, y a la protección de los recursos hídricos. Las agencias obtienen su financiación a través de los cánones proporcionales abonados por los contaminadores y usuarios del agua. dichos cánones se redistribuyen a continuación en forma de ayudas (subvenciones y préstamos) a las colectividades locales, la industria y la agricultura (y, más a menudo, a las autoridades contratantes). De ese modo, pueden realizar diversas obras como, por ejemplo, la construcción de estaciones depuradoras y de redes de saneamiento, las obras para la producción de agua potable, el acondicionamiento de ríos, la elaboración de estudios, o la instalación de redes de medida.

La legislación francesa no ofrece la más mínima duda respecto del carácter estatal de las agencias. Así pues, llegados a este punto, cabe concluir que estas últimas constituyen una prolongación de los poderes públicos.

Por lo que respecta al canon percibido por las agencias del agua y empleado para la financiación de las ayudas a la inversión en el marco del PMPOA, el artículo 17 del Decreto 66-700 prevé que el importe global de los cánones que deben percibirse y son susceptibles de cobro por la agencia en virtud de lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1964, se fija en función de los diversos gastos en que se prevé que incurra la agencia en cuestión, en el marco de un programa de intervención plurianual aprobado por el Primer Ministro, tras el dictamen de la comisión interministerial. Según dicha legislación, el Gobierno desempeña un papel director en relación con los programas subvencionables y con la magnitud de los cánones que se destinarán a su financiación. Debido a ello, la finalidad de los cánones y su utilización se integran en una estrategia estatal en favor del medio ambiente, de la que el PMPOA constituye exclusivamente una manifestación puntual. En ese sentido, la participación de las agencias del agua en la aplicación de dicho programa en forma de ayudas a la inversión constituye sin lugar a dudas una intervención de los poderes públicos.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido en numerosas ocasiones que la prohibición prevista en el apartado 1 del artículo 87 abarca al conjunto de las ayudas concedidas por los Estados o mediante fondos estatales, sin que deban establecerse distinciones entre los casos en que la ayuda es concedida directamente por el Estado o aquellos en que es

otorgada por organismos públicos o privados por él instituidos o designados a fin de gestionar la ayuda <sup>(4)</sup>. El Tribunal considera asimismo que, a efectos de aplicación del artículo 87, es preciso tener en cuenta fundamentalmente la repercusión de la ayuda sobre las empresas o los productores beneficiarios, y no la situación de los organismos de distribución o gestión de la ayuda.

El Tribunal añade que una medida de las autoridades públicas que favorezca a determinadas empresas o productos no pierde su carácter de ventaja gratuita por el hecho de haber sido financiada total o parcialmente mediante contribuciones impuestas por esas mismas autoridades y cobradas a las empresas en cuestión <sup>(5)</sup>. Por último, el Tribunal dictamina asimismo que se inscribirá en el ámbito de aplicación del artículo 87 del Tratado una ayuda que haya sido decidida y financiada por un organismo público, cuya aplicación se supedita a la autorización de los poderes públicos, cuyas modalidades de concesión equivalgan a las de una ayuda pública ordinaria y que, además -aludiendo a una medida específica del asunto objeto de la sentencia- haya sido presentada por el Gobierno integrada en un conjunto de medidas en favor de los agricultores <sup>(6)</sup>. Por otro lado, la Comunicación de la Comisión de 26 de marzo de 1997 sobre los impuestos y gravámenes ambientales en el mercado único <sup>(7)</sup> precisa en su punto 27 que los ingresos obtenidos a partir de los cánones ambientales constituyen «recursos estatales», añadiendo que, cuando los ingresos se asignan a un fin específico, puede estar produciéndose a una ayuda estatal en caso de que salgan beneficiadas algunas empresas o producciones.

A la luz de cuanto precede, y, en particular, de las disposiciones legislativas adoptadas en Francia en relación con las agencias del agua y sus métodos funcionamiento, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión concluye, en este punto, que las agencias del agua deben considerarse prolongaciones del Estado y que la financiación por parte de dichas agencias de las inversiones en las explotaciones agrícolas constituyen una ayuda estatal en el sentido del Tratado.

Las autoridades francesas opinan que el actual sistema de ayudas de las agencias del agua no puede considerarse susceptible de falsear la competencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado. Consideran que, las agencias, que actualmente están dotadas de un régimen que les es propio, perciben exacciones específicas de personas o de grupos de personas o categorías de empresas. Así pues, se trata de un régimen de cánones específicos que se combina con un sistema de ayudas concretas, por lo que, globalmente, el resultado es equilibrado desde el punto de vista financiero.

<sup>(2)</sup> Carta de la Comisión a los Estados miembros de 19.9.1975 (referencia 75/29416), «Propuestas de medidas útiles en relación con las ayudas concedidas por los Estados miembros en el sector de la ganadería y de los productos derivados de esta actividad».

<sup>(3)</sup> Artículo 2 del Decreto 66-700, de 14 de septiembre de 1966.

<sup>(4)</sup> TJCE, 22 de marzo de 1977, asunto 78/76: Steinike & Weinlig contra República Federal de Alemania, (Recopilación 1977, p. 595); TJCE, 7 de junio de 1988, asunto 57/86: República Helénica contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recopilación 1988, p. 2855); TJCE, 30 de enero de 1985, asunto 290/83: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa, (Recopilación 1985, p. 493).

<sup>(5)</sup> TJCE, 22 de marzo de 1977, asunto 78/76: Steinike & Weinlig contra República Federal de Alemania (Recopilación 1977, p. 595); TJCE, 31 de enero de 2001, asuntos acumulados T-197/97 y T-198/97: Weyl Beef Products BV y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas, aún no publicada.

<sup>(6)</sup> TJCE, 30 de enero de 1985, asunto 290/83: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa (Recopilación 1985, p. 493).

<sup>(7)</sup> COM(97) 9 final.

Según la Comisión, habida cuenta de que la medida de ayuda a la inversión ejecutada por las autoridades francesas puede favorecer a determinados explotadores agrícolas pertenecientes a tres sectores de producción muy precisos, a saber, los de carne de bovino, porcino y aves de corral, que se encuentran muy expuestos a la competencia a escala comunitaria, parece evidente que cualquier ayuda otorgada en favor de los productores en cuestión podría repercutir sobre la libre competencia y que, por consiguiente, correría el riesgo de falsearla.

### Regímenes autorizados por la Comisión

Por lo que respecta al sector porcino, la naturaleza de las inversiones previamente notificadas a la Comisión queda efectivamente recogida en el PMPOA. Aunque hayan podido observarse ciertas modificaciones en la forma que adopta la ayuda, éstas últimas no pueden cuestionar la compatibilidad de la ayuda con el Tratado. Así pues, las inversiones equivalen básicamente a las autorizadas por la Comisión. Por lo que respecta al sector bovino, en la actualidad, la Comisión está capacitada para constatar su compatibilidad con dichas normas. En efecto, el dispositivo, tal como ha sido descrito anteriormente, no se diferencia prácticamente del aplicable al sector porcino. En cuanto al sector avícola, la Comisión observa que el PMPOA ha reproducido exactamente el régimen por ella autorizado. La Comisión, aludiendo a los argumentos aportados durante la evaluación de los regímenes en cuestión y por lo que respecta a la naturaleza de las inversiones y las formas de ayuda previstas por las autoridades francesas en el marco del PMPOA concluye que dichas ayudas, pese a adolecer de ciertas ilegalidades, se han ejecutado de conformidad con las normas europeas de competencia vigentes en su momento. Así pues, la Comisión no cuestiona este aspecto de la aplicación de la ayuda.

No obstante, según la legislación aplicable en el momento de la entrada en vigor del programa, el porcentaje máximo autorizado para las ayudas a la inversión en favor de la protección del medio ambiente era del 35 % de los costes soportados (45 % en las zonas desfavorecidas). En efecto, el quinto guión del apartado 5 del artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 2328/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias<sup>(8)</sup>, preveía un examen de las ayudas nacionales a la luz de los antiguos artículos 92 y 93 (actuales artículos 87 y 88) del Tratado y el artículo 6 del mismo Reglamento autorizaba las ayudas para las inversiones destinadas a la protección del medio ambiente, siempre que no llevaran aparejado un aumento de la producción. En sus anteriores decisiones, la Comisión ha tenido en cuenta su práctica habitual de considerar compatible con el mercado común para este tipo de ayudas un porcentaje del 35 % de los costes subvencionables (45 % en las zonas menos desarrolladas). Esos porcentajes de ayuda fueron confirmados por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente<sup>(9)</sup> (punto 3.2.3), que entraron en vigor en 1994, poco después de que lo hiciera el programa.

En esta fase, la Comisión observa que los límites máximos de ayuda autorizados para ese tipo de inversiones no parecen haberse respetado. En efecto, la contribución de la agencia del agua a la financiación del PMPOA habría elevado el porcentaje de financiación pública a  $\frac{2}{3}$  de los costes de inversión, o sea, aproximadamente al 66,6 % de los costes soportados. Esto representaría una superación del porcentaje autorizado para la financiación de los costes equivalente a un 31,6 %

(21,6 % en las zonas menos desarrolladas). Por lo que respecta al régimen en favor de los jóvenes agricultores que se establecieron a partir del 1 de enero de 1996, se habría producido el mismo fenómeno.

No obstante, a partir del 1 de enero de 2000 -fecha de entrada en vigor de las nuevas Directrices agrarias- la Comisión autoriza, con arreglo a las mismas (punto 4.1.1.2) porcentajes de ayuda para este tipo de inversiones del 40 % de los costes soportados (50 %, en las zonas menos desarrolladas). En cuanto a los jóvenes agricultores, el porcentaje autorizado es del 45 % (55 % en las zonas menos desarrolladas). Esto significa que, en aplicación de estas condiciones más favorables, y en relación con las ayudas concedidas en 2000 y 2001, el rebasamiento de los porcentajes en las ayudas otorgadas habría sido sólo del 26,6 % (16 % en las zonas menos desarrolladas) y para los jóvenes agricultores del 21,6 % (el 11,6 % en las zonas menos desarrolladas), para las inversiones realizadas a partir del 1 de enero de 2000 y que cumplen todos los requisitos previstos en las Directrices.

Habida cuenta de que las ayudas autorizadas por la Comisión en favor de las inversiones se basaban en un porcentaje de financiación pública autorizada del 35 %, como máximo, de los costes de dichas inversiones (45 % en las zonas menos desarrolladas), incluso del 40 al 55 %, según los casos, a partir del 1 de enero de 2000, la Comisión se ve obligada a constatar, en esta fase, que el nivel de las ayudas concedidas en aplicación del PMPOA no parece corresponderse con el porcentaje de ayuda autorizado y que, por tanto, toda ayuda pública que se conceda rebasando los porcentajes máximos autorizados constituye una ayuda estatal incompatible con el Tratado.

### CARTA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France que, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE pour ce qui concerne le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (ci-après dénommé «le PMPOA») et, plus concrètement, pour ce qui concerne son application lors de la période 1994-2001.

#### I. PROCÉDURE

Suite à des informations parvenues aux services de la Commission concernant l'existence, en France, d'un programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (dit «PMPOA»), les services de la Commission se sont adressés aux autorités françaises, par lettre du 24 février 2000, pour demander des précisions sur l'application dudit programme depuis 1994. Par lettre du 31 mai 2000, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a envoyé certaines informations, dont la confirmation de l'existence du PMPOA depuis 1994. Elles ont, en outre, notifié à la Commission européenne, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet de prorogation dudit programme au-delà de 2001.

Des informations complémentaires, tant sur l'application par le passé que sur le projet concernant l'avenir du PMPOA, ont été demandées par la Commission par lettre du 11 juillet 2000. Les autorités françaises ont répondu par lettre du 26 décembre — concernant l'application du PMPOA depuis 1994 — et du 21 décembre 2000 — concernant la nouvelle notification —. La Commission a ensuite décidé de scinder l'examen du dossier. Ainsi, seule la partie relative au passé fait l'objet de la présente ouverture de procédure. La notification visant la continuation du régime fait l'objet d'un examen séparé sous le numéro N 355/2000.

<sup>(8)</sup> DO L 218 de 6.8.1991.

<sup>(9)</sup> DO C 72 de 10.3.1994.

## II. DESCRIPTION

### Le PMPOA

Le PMPOA est le résultat d'un accord passé entre l'État français et les organisations professionnelles agricoles françaises le 8 octobre 1993. Il est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1994. Le programme a pour but de permettre aux agriculteurs d'adapter leurs équipements et leurs pratiques en vue d'une meilleure protection de l'environnement, et notamment de la protection de l'eau. Les pollutions identifiées qui font l'objet du programme sont la pollution des eaux par les produits phytosanitaires et par les fertilisants d'origine minérale et organique.

Le PMPOA vise particulièrement au respect de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles<sup>(10)</sup> (dite «directive "nitrates"») ainsi que les dispositions nationales pour l'introduction d'un code de bonnes pratiques agricoles. Il concerne l'ensemble des modes de production: élevages et cultures.

Pour se mettre en conformité et pour prévenir la pollution des ressources en eau par les déjections animales, la réalisation de travaux pour améliorer les bâtiments d'élevage et la gestion des effluents a été jugée nécessaire. Le coût des travaux à réaliser sur les seuls bâtiments a été évalué à l'époque, de façon indicative, à 7 milliards de FRF (environ 1 milliard d'euros) pour un calendrier allant jusque 2002. Un programme d'investissements a été engagé, dont le plan de financement global retenu a été le suivant: éleveurs: un tiers; État (ministère de l'agriculture et de la pêche) et collectivités territoriales: un tiers à parité et Agences de l'eau: un tiers. En contrepartie, les éleveurs susceptibles de bénéficier des aides sont assujettis à la redevance sur la pollution, perçue par les Agences de l'eau.

Par une note du 24 février 1994 aux instances administratives concernées, les ministères de l'environnement et de l'agriculture ont précisé les éléments de procédure dégagés par le comité de suivi national chargé de la mise en œuvre du programme (calendrier, clés de financement et application auprès des éleveurs).

En ce qui concerne le lien du programme avec les installations classées, les autorités françaises ont signalé dans cette note qu'il est dans l'intérêt de l'éleveur, lorsque les travaux prévus par le ou les contrats auront été réalisés, d'être en conformité avec les arrêtés ministériels du 29 février 1992 relatifs aux élevages, pour les dispositions qui concernent la protection de l'eau.

La mise en exécution du PMPOA a suivi une approche sectorielle et a été réalisée au moyen des circulaires, contenant les modalités d'aide, du ministère de l'agriculture et de la pêche aux préfets de région et de département. Les autorités françaises ont envoyé récemment à la Commission, à la demande de cette dernière, une copie des circulaires suivantes:

- circulaire DEPSE/SDEEA n° 7016 du 22 avril 1994, «Aides à la mise en conformité des élevages bovins et porcins»,
- circulaire DEPSE/SDEEA n° 7021 du 18 avril 1995, «Aides à la mise en conformité des élevages avicoles»,
- circulaire DEPSE/SDEEA n° 7028 du 19 juin 1995, «Aides à la mise en conformité des élevages»,

<sup>(10)</sup> JO L 375 du 31.12.1991, p. 51.

- circulaire DEPSE/SDEEA n° 7001 du 15 janvier 1996, «Aide à la mise en conformité des élevages. Cas des jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996».

### Application du PMPOA dans les secteurs concernés

#### 1. Bénéficiaires

Les exploitants ou les propriétaires des biens fonciers à usage agricole.

#### 2. Investissements subventionnables

2.1. Secteurs bovin et porcin: l'aménagement de bâtiments existants. Par exception, dans le cas de constructions neuves, seule la part des capacités de stockage des déjections excédant une durée de quatre mois (dites «surcapacités») peut être subventionnée dans la limite de la durée de stockage préconisée par le diagnostic. Les constructions neuves correspondant à la désaffectation des bâtiments existants peuvent être subventionnées lorsque des contraintes réglementaires ou techniques empêchent la mise en conformité des bâtiments existants.

Les travaux subventionnables doivent comprendre un des éléments suivants: nouvelles capacités de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides; réseaux matériels fixes de transfert des effluents d'une fosse à l'autre; travaux et équipements ayant pour effet d'éviter l'écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs de stockage et d'éviter la dispersion des eaux souillées; travaux visant l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents; dispositifs mécanisés de séparation des solides et des liquides; barrières antichutes autour des fosses; systèmes de désodorisation du lisier par aération mécanique, avec compteur; matériels d'épandage par irrigation; en production porcine, systèmes d'alimentation et d'abreuvement économes en eau, systèmes d'alimentation multiphase nécessaires aux régimes alimentaires visant une réduction significative des quantités d'azote rejetées dans les déjections, compteurs d'eau.

2.2. Secteur avicole: lorsque les capacités de production n'augmentent pas, les nouvelles capacités de stockage des effluents pour atteindre au moins la norme nationale de quatre mois de stockage pour les élevages existants. Lorsqu'il y a augmentation de production, seules les capacités de stockage d'effluents au-delà de la réglementation sont subventionnables. La circulaire précise que, dans ce dernier cas, il n'y a pas d'aide pour les travaux qui correspondent à la mise en conformité avec la réglementation. Seules peuvent être aidées les capacités de stockage d'effluents, dites «surcapacités» qui vont au-delà des prescriptions nationales (quatre mois) car elles correspondent à un effort spécifique en matière d'environnement.

Les travaux subventionnables doivent comprendre un des éléments suivants: travaux et équipements ayant pour effet d'éviter l'écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs de stockage; travaux visant l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents; dispositifs contre le gaspillage de l'eau, et notamment les systèmes d'abreuvement économes en eau ainsi que les équipements d'alimentation multiphase visant une réduction significative des quantités d'azote rejetées dans les déjections; installations de séchage des lisiers de volailles, y compris les appareils de ventilation des fosses et des litières ainsi que les systèmes de désodorisa-

tion du lisier par aération mécanique, avec compteur; matériels fixes de transfert des déjections vers les lieux de stockage et dispositifs non mécanisés de séparation des solides et des liquides; matériels d'épandage par irrigation; pour les élevages utilisant des parcours: les haies vives et massifs arbustifs visant à assurer une bonne répartition des animaux sur l'aire qui leur est affectée.

### 3. Plafond d'investissement

#### 3.1. Secteurs bovin et porcin:

- capacités et descentes de stockage de lisier: 300 FRF/m<sup>3</sup>,
- gouttières et descentes d'eaux pluviales: 110 FRF/mètre linéaire,
- systèmes d'alimentation économes en eau (porcs): 100 FRF/place de porc à l'engrais et 50 FRF/place de porc en post-sevrage,
- systèmes d'alimentation multiphase (porcs): 150 FRF/place de porc à l'engrais.

3.2. Secteur avicole: la subvention en capital est de 30 % du montant des investissements dans la limite, pour certains postes, des plafonds suivants:

- capacités nouvelles de stockage de lisier: 300 FRF/m<sup>3</sup>,
- gouttières et descentes d'eaux pluviales: 110 FRF/mètre linéaire,
- alimentation multiphase: 35 FRF/m<sup>2</sup>,
- haies vives et massifs arbustifs: 1 FRF/m<sup>2</sup> de parcours.

### 4. Financement

Intervention de l'État au taux de 35 % des coûts sous forme d'une subvention en capital au taux de 30 % à laquelle peut s'ajouter le bénéfice d'un prêt bonifié dont l'équivalent-subvention correspondrait à 5 %.

En ce qui concerne les secteurs bovin et porcin, des aides sont aussi envisagées pour les exploitants réalisant leur projet dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) dans les zones défavorisées sous forme d'une aide en capital de 30 % et d'un prêt ayant un équivalent-subvention de 15 %. Les taux sont relevés lorsqu'il s'agit en plus de jeunes agriculteurs (43,75 % en zone de plaine et 56,25 % en zone défavorisée). Dans le secteur avicole, pour les jeunes agriculteurs, une majoration de 5 % au moyen d'un prêt bonifié est prévue.

#### *Application du PMPOA vis-à-vis des jeunes agriculteurs*

La circulaire DEPSE/SDEEA n° 7001 du 15 janvier 1996 modifie les taux d'aide en faveur des jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996. Le taux de la subvention en capital est porté de 30 à 35 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires. Aucun prêt bonifié n'est prévu. Dans les autres zones, le taux d'aide en capital est porté de 30 à 32,5 %. Un prêt complémentaire ayant un effet équivalent-subvention de 2,5 % est permis.

#### *Diagnostic d'exploitation*

Pour avoir accès aux aides, les producteurs doivent présenter une étude préalable, réalisée pour leur compte par des techniciens agréés, au terme de laquelle le projet d'investissement du producteur est élaboré. Le diagnostic sert de base au contrat (voir ci-dessous) et, donc, à la définition de l'assiette éligible par chacune des parties participantes au financement public des travaux.

Le diagnostic, élaboré sur la base d'une méthode appelée «Dexel», prend en compte la situation de l'exploitation en considérant l'ensemble de ses bâtiments d'élevage et la gestion de l'ensemble de leurs effluents.

Selon les autorités françaises, ces études représentent 2 % du coût des investissements et sont aidées à hauteur de 50 % par l'État et de 50 % par les Agences de l'eau, dans la limite d'un plafond de 6 000 FRF hors taxes (914 euros). Ce plafond peut être multiplié par le nombre des sites d'implantation des bâtiments, dans la limite de trois par exploitation ou par groupe d'exploitations.

#### *Contrat de maîtrise des pollutions*

Le contrat est l'élément qui garantit à l'éleveur l'application du dispositif d'aide prévu dans le PMPOA ainsi que la compensation d'une éventuelle redevance à l'Agence de l'eau. Il n'y a pas de lien direct entre les zones vulnérables définies au titre de la directive «nitrates» et les redevances éventuellement dues à l'Agence.

Selon la formulation des autorités françaises, il s'agit d'un contrat de confiance qui met forcément en lumière l'existence de problèmes d'environnement dans un élevage, mais dont le but est d'aider à leurs résolutions. Il est signé par l'ensemble des partenaires financiers, dont l'éleveur.

#### *Les Agences de l'eau*

Les Agences de l'eau sont des établissements publics de l'État, créés en 1964, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière<sup>(1)</sup>. Elles sont placées sous la tutelle du ministère de l'environnement et du ministère de l'économie et des finances, et sont dirigées par un conseil d'administration dont la composition est représentative des différents usagers de l'eau. Les Agences sont réparties sur six grands bassins qui couvrent l'ensemble du territoire national métropolitain: Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. On retrouve dans ces bassins une organisation identique, composée d'un comité de bassin, d'une Agence de l'eau et de son conseil d'administration.

Leur politique est définie par le comité de bassin et s'articule autour de quatre grands axes: la gestion et la ressource en eau; la lutte contre la pollution; la préservation des milieux aquatiques et le suivi de la qualité des eaux continentales et littorales. Les Agences de l'eau travaillent par programmes quinquennaux. Entre 1997 et 2001, elles ont prévu d'aider au financement d'un volume de travaux évalué à 105 milliards de FRF (environ 16 milliards d'euros) pour préserver les ressources françaises en eau et lutter contre la pollution.

<sup>(1)</sup> Informations partiellement extraites du site Internet des Agences de l'eau: <http://www.eaufrance.tm.fr>.



Les Agences apportent des conseils techniques aux élus, aux industriels et aux agriculteurs et leur fournissent des aides financières afin d'entreprendre les travaux nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux et à la protection des ressources en eau. Les financements des Agences proviennent des redevances proportionnelles perçues auprès des pollueurs, préleveurs et consommateurs d'eau. Ces redevances sont ensuite redistribuées sous forme d'aides (subventions et prêts) aux collectivités locales, aux industriels et à l'agriculture (et plus généralement aux maîtres d'ouvrage). Ceux-ci peuvent ainsi réaliser des travaux tels que des stations d'épuration, des réseaux d'assainissement, des ouvrages de production d'eau potable, des aménagements de rivières, des études et des réseaux de mesure.

#### *Notification du PMPOA à la Commission*

Les autorités françaises ont notifié le 13 février 1991 une aide d'État en faveur de l'environnement des élevages porcins visant des aides aux investissements individuels (aide N 136/91). La Commission a autorisé l'aide par lettre du 11 décembre 1991.

Les autorités françaises ont communiqué, le 20 avril 1993, dans le cadre d'un programme structurel cofinancé, et conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture <sup>(12)</sup>, les circulaires DEPSE/SDEE n° 93-7005 du 2 mars 1993 et DEPSE/SDEE n° 7027 du 5 novembre 1992, concernant les aides à l'investissement dans le secteur de la viande bovine. La Commission a adopté une décision positive le 29 juillet 1993. L'aide nationale n'a pourtant pas été notifiée à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Selon les autorités françaises, ces dispositifs, antérieurs à l'entrée en vigueur du PMPOA, y ont été intégrés par la circulaire DEPSE n° 7016 du 22 avril 1994. Ils constituent donc les volets bovin et porcin du PMPOA. Cette circulaire n'a pas été notifiée à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Les autorités françaises ont notifié, par lettre du 13 juin 1994, une aide d'État aux investissements pour la protection de l'environnement en aviculture (aide N 342/94). Ce régime, intégré par la suite au PMPOA dont il constitue le volet avicole, a été autorisé par la Commission en 1995.

Ces trois dispositifs ont d'ailleurs fait l'objet d'une fiche dans *l'Inventaire des aides nationales dans le secteur agricole (1992-1996)*, élaboré par le ministère de l'agriculture et de la pêche et transmis à la Commission européenne le 28 juillet 1998 (fiche FR/XXX/33-00/001).

Les autorités françaises n'ont pas notifié, au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité, l'accord du 8 octobre 1993 ni aucun autre document détaillant les caractéristiques du PMPOA rela-

tives, notamment, à la clé de financement du programme <sup>(13)</sup>. La Commission n'a pas été informée, notamment, de la participation des Agences de l'eau au financement du programme. Elle n'a donc pas été en mesure d'évaluer la participation de celles-ci dans le programme et les effets que cela aurait pu avoir sur l'intervention publique au niveau des investissements concernés. Plus concrètement, elle n'a pas pu examiner les répercussions possibles que la participation d'un établissement public dans le financement de l'aide risque d'avoir en termes d'intensité de l'aide.

Il en résulte que la portée des aides, telles qu'autorisées par la Commission dans le cadre des aides d'État N 136/91 et N 342/94, ne répond pas forcément aux aides telles qu'elles ont été octroyées par les autorités françaises.

En outre, pour ce qui est du secteur bovin, les autorités françaises n'ont même pas notifié à la Commission les aides aux investissements prévues. Les autorités françaises prétendent pourtant que, dès lors que la Commission estimait le dispositif éligible à une participation financière de la Communauté, elles étaient fondées à en déduire sa compatibilité avec la réglementation communautaire. Or, le règlement (CEE) n° 2328/91, applicable à l'époque, prévoyait à son article 12, paragraphe 5, que les aides aux investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement sont autorisées sous réserve qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la production et qu'elles soient conformes aux articles 92 à 94 du traité (actuellement 87 à 89). Cela inclut l'obligation de notifier tout régime d'aides d'État au sens de l'ancien article 93, paragraphe 3, et cela d'autant plus que, comme on l'a déjà vu, les conditions appliquées aux aides en 1994 ne correspondaient pas aux conditions communiquées à la Commission en 1991.

De même, aucune notification concernant les jeunes agriculteurs n'a été soumise à la Commission.

### III. APPRÉCIATION

#### **1. Interdiction figurant à l'article 87, paragraphe 1, du traité**

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Les articles 87 à 89 du traité sont rendus applicables dans le secteur de la viande de porc par l'article 21 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil <sup>(14)</sup> portant organisation commune des

<sup>(13)</sup> TPI, 15 septembre 1998, affaire jointes T-126/96 et C-127/96, Breda Fucine Meridionali SpA et autres contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-3437. Le Tribunal y a retenu l'argument de la Commission selon lequel une communication d'un État membre ne peut pas être acceptée en tant que notification valable lorsqu'elle ne comporte pas de référence explicite à l'article 88, paragraphe 3, du traité et qu'elle n'a pas été présentée au secrétariat général. De ce fait, elle doit être considérée comme n'ayant pas été notifiée.

<sup>(14)</sup> JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

<sup>(12)</sup> JO L 218 du 6.8.1991, p. 1.

marchés pour ces produits. Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l'article 40 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil <sup>(15)</sup> portant organisation commune des marchés pour ces produits. Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient rendus applicables dans le même secteur par l'article 24 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil <sup>(16)</sup>. Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande de volaille par l'article 19 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil <sup>(17)</sup> portant organisation commune des marchés pour ces produits.

La Cour de justice des Communautés européennes a, à son tour, dit pour droit, à plusieurs reprises, que l'interdiction de l'article 87, paragraphe 1, englobe l'ensemble des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où l'aide est accordée directement par l'État ou par des organismes publics ou privés qu'il institue ou désigne en vue de gérer l'aide <sup>(18)</sup>.

#### 1.1. *Participation des Agences de l'eau au PMPOA est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité*

Les Agences de l'eau ont participé au financement des coûts d'investissements du PMPOA à hauteur d'un tiers de ceux-ci. Leur participation au financement du PMPOA n'a été connue des services de la Commission que suite à la diffusion d'un rapport d'évaluation sur la gestion et le bilan du PMPOA, élaboré par l'Inspection générale des finances, le Comité permanent des corps d'inspection du ministère de l'agriculture et la pêche et le Conseil général du génie rural des eaux et forêts <sup>(19)</sup>.

L'article 2 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 prévoit que les Agences de l'eau sont des établissements publics de l'État, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière <sup>(20)</sup>. Elles sont placées sous la tutelle du ministère de l'environnement et du ministère de l'économie et des finances, et sont dirigées par un conseil d'administration dont la composition est représentative des différents usagers de l'eau et représentants de l'administration. La législation française ne laisse pas de doute quant à la nature publique des Agences. Il y a donc lieu de conclure à ce stade que celles-ci constituent une extension des pouvoirs publics.

À cet égard, le Tribunal de première instance a dit que relève du secteur public un établissement institué par la loi d'un État membre en tant qu'établissement spécial placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative, dont les missions sont réglées par des dispositions légales et réglementaires et dont le directeur général et les autres dirigeants sont nommés respectivement par le chef de l'État et par le gouvernement de cet État membre, sans que ce caractère public puisse être remis en cause par des éléments de l'organisation interne du secteur

public tels que l'existence de règles assurant l'indépendance de cet établissement par rapport à d'autres instances publiques. Le Tribunal ajoute que le droit communautaire ne saurait admettre que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d'aides permette de contourner les règles relatives aux aides d'État <sup>(21)</sup>.

En ce qui concerne la redevance, perçue par les Agences, servant de base aux aides aux investissements dans le cadre du PMPOA, l'article 17 du décret n° 66-700 prévoit que le montant global des redevances à percevoir susceptibles d'être mises en recouvrement par l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 16 décembre 1964 est fixé en fonction des dépenses de toutes natures devant incomber à l'Agence, dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention approuvé par le premier ministre après avis de la mission interministérielle.

D'après cette législation, le gouvernement joue un rôle directeur concernant les programmes finançables et la portée des redevances y affectées. Il transparaît de cela que tant les redevances comme l'utilisation de celles-ci font partie d'une stratégie étatique en faveur de l'environnement, dont le PMPOA n'est qu'une manifestation ponctuelle. Dans ce sens, la participation des Agences de l'eau dans la mise en œuvre dudit programme sous forme d'aides aux investissements constitue de toute évidence un acte des pouvoirs publics.

Il se dégage de ceci que les montants versés par les Agences de l'eau en vue de financer le PMPOA sont des ressources publiques. Le Tribunal de première instance a en effet estimé qu'un investissement, financé par le solde disponible à une caisse des dépôts et consignations — établissement public spécial institué par la loi —, est susceptible de fausser la concurrence au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, au même titre que si cet investissement avait été financé au moyen des recettes constituées par des taxes ou contributions obligatoires. Cette disposition englobe donc tous les moyens pécuniaires que le secteur public peut effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine dudit secteur <sup>(22)</sup>.

Toujours selon la Cour, pour l'application de l'article 87, ce sont essentiellement les effets de l'aide en ce qui concerne les entreprises ou producteurs bénéficiaires qu'il y a lieu de prendre en considération et non la situation des organismes distributeurs ou gestionnaires de l'aide. La Cour ajoute qu'une mesure de l'autorité publique favorisant certaines entreprises ou certains produits ne perd pas son caractère d'avantage gratuit par le fait qu'elle serait partiellement ou totalement financée par de contributions imposées par l'autorité publique et prélevées auprès des entreprises concernées <sup>(23)</sup>.

Enfin, la Cour dit aussi que relève de l'article 87 du traité une aide qui a été décidée et financée par un établissement public, dont la mise en œuvre est subordonnée à l'approbation des pouvoirs publics, dont les modalités d'octroi correspondent à

<sup>(15)</sup> JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

<sup>(16)</sup> JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

<sup>(17)</sup> JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

<sup>(18)</sup> CJCE, 22 mars 1977, affaire 78/76, Steinike & Weinlig contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1977, p. 595. CJCE, 7 juin 1988, affaire 57/86, République hellénique contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 2855. CJCE, 30 janvier 1985, affaire 280/93, Commission des Communautés européennes contre République française, Rec. 1985, p. 493.

<sup>(19)</sup> Rapport établi le 26 juillet 1999 et diffusé en 2000 sur le site Internet du ministère français de l'agriculture: <http://www.agriculture.gouv.fr>.

<sup>(20)</sup> Article 2 du décret relatif aux Agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.

<sup>(21)</sup> TPI, 12 décembre 1996. Compagnie nationale Air France contre Commission des Communautés européennes, affaire T-358/94; rec. 1996, p. II-2109.

<sup>(22)</sup> Voir note 21 de bas de page.

<sup>(23)</sup> CJCE, 22 mars 1977, affaire 78/76, Steinike & Weinlig contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1977, p. 595. CJCE, 31 janvier 2001, affaires jointes T-197/97 et T-198/97, Weyl Beef Products BV et autres contre Commission des Communautés européennes, pas encore publiée.

celles d'une aide étatique ordinaire et qui, par ailleurs, — se référant à une mesure spécifique au cas jugé — a été présentée par le gouvernement comme faisant partie d'un ensemble de mesures en faveur des agriculteurs <sup>(24)</sup>.

En outre, la communication de la Commission du 26 mars 1997 sur les impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique <sup>(25)</sup> précise, au point 27, que les recettes au titre des prélèvements environnementaux constituent des «ressources d'État». Elle ajoute que, lorsque les recettes sont affectées à une fin particulière, il peut être question d'une aide d'État si certaines entreprises ou certaines productions sont favorisées.

À la lumière de ce qui précède, et notamment à la lumière des dispositions législatives adoptées en France concernant les Agences de l'eau et leurs méthodes de fonctionnement ainsi que de la jurisprudence de la Cour, la Commission doit conclure, à ce stade, que les Agences de l'eau sont à considérer comme des extensions de l'État et que le financement par ces Agences des investissements dans les exploitations agricoles constitue une aide d'État.

Afin d'établir si cette aide tombe sous le champ de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il faut ensuite déterminer si cette aide est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et s'il y a un risque qu'elles menacent de fausser la concurrence.

### 1.2. Affectation des échanges entre États membres

Il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, les secteurs concernés sont particulièrement ouverts à la concurrence au niveau communautaire et, partant, très sensibles à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre des États membres.

Le tableau suivant montre le niveau des échanges commerciaux entre la France et les autres États membres pour les produits concernés lors de la première année suivant l'entrée en vigueur du PMPOA:

France/UE 11	Viande bovine	Viande porcine	Volailles
Importations 1994			
Tonnes	525 000	463 000	85 000
Millions d'écus	1 664	860	170
Exportations 1994			
Tonnes	796 000	361 000	389 000
Millions d'écus	2 368	669	863

### 1.3. Effets sur la concurrence de la participation des Agences de l'eau au PMPOA

Les autorités françaises sont d'avis que l'actuel dispositif d'intervention des Agences de l'eau ne peut être considéré comme susceptible de fausser la concurrence au titre de l'article 87 du

traité. Elles considèrent que, dotées actuellement d'un régime *sui generis*, les agences perçoivent des redevances spécifiques de personnes ou de catégories de personnes ou d'établissements. Il s'agit donc d'un système de redevances spécifiques couplé avec un système d'aides spécifiques, l'ensemble étant financièrement équilibré.

Elles ajoutent que la communication de la Commission du 26 mars 1997 sur les impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique conforterait cette analyse, puisque son point 33 précise que «la redistribution des recettes au titre des prélèvements sur les émissions, n'ayant frappé que des entreprises nationales, au collectif qui les a payés ne doit normalement pas soulever de controverse pour autant que le système utilisé soit conforme aux exigences générales en matière de transparence et de caractère non arbitraire». En outre, la communication du 26 juillet 2000 sur la tarification et gestion durable des ressources en eau <sup>(26)</sup> précise, au point 3.3, que «d'une manière générale, la combinaison de redevances d'utilisation ou de pollution et d'aides aux investissements et pratiques favorables à l'environnement s'est souvent révélée très efficace pour traiter les problèmes environnementaux».

Les autorités françaises considèrent ainsi que les aides des Agences de l'eau au titre du PMPOA, mises en place à compter de 1994, s'intègrent totalement dans le dispositif rappelé ci-dessus. Ainsi, l'intégration des élevages dans le dispositif des Agences de l'eau comprend la mise en place d'une redevance spécifique sur les pollutions générées par les élevages.

La Commission note tout d'abord que les autorités françaises ne mettent pas en question la nature d'aide d'État, au sens de l'article 87 du traité, de la contribution des Agences de l'eau au financement des investissements du PMPOA.

La Commission ne peut que confirmer son idée concernant les bienfaits envers l'environnement qui devraient dériver de la combinaison de redevances d'utilisation ou de pollution et d'aides aux investissements et pratiques favorables à l'environnement. Toutefois, ces effets positifs n'annulent pas le caractère d'aide d'État au sens du traité que revêt le financement des investissements par un organisme public par voie d'une redevance définie et prélevée par les pouvoirs publics. Rappelons encore à cet égard la jurisprudence de la Cour selon laquelle une mesure de l'autorité publique favorisant certaines entreprises ou certains produits ne perd pas son caractère d'avantage gratuit par le fait qu'elle serait partiellement ou totalement financée par des contributions imposées par l'autorité publique et prélevée auprès des entreprises concernées <sup>(27)</sup>.

Par conséquent, en tant qu'aides d'État, ces mesures sont soumises aux règles de concurrence applicables. Par ailleurs, le premier alinéa du chapitre 3 de la communication du 26 juillet 2000 précise qu'il «propose des orientations aux responsables des politiques et aux parties intéressées en vue de l'élaboration de politiques de tarification de l'eau aptes à améliorer la durabilité de la gestion des ressources en eau. Il ne défend pas l'idée de fixer un prix de l'eau unique ou de

<sup>(26)</sup> COM(2000) 477 final.

<sup>(27)</sup> CJCE, 22 mars 1977, affaire 78/76, Steinike & Weinlig contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1977, p. 595. CJCE, 31 janvier 2001, affaires jointes T-197/97 et T-198/97, Weyl Beef Products BV et autres contre Commission des Communautés européennes, non encore publiées.

<sup>(24)</sup> CJCE, 30 janvier 1985, affaire 280/93, Commission des Communautés européennes contre République française, Rec. 1985, p. 493.

<sup>(25)</sup> COM(97) 9 final.

remplacer toute réglementation par des instruments économiques et la tarification». Aucune dérogation aux règles de concurrence ne saurait être tirée de ce texte.

En ce qui concerne la référence au point 33 de la communication du 26 mars 1997, la Commission constate que la dernière phrase de ce point précise que «ces systèmes [de redistribution des recettes au titre des prélèvements sur les émissions] doivent cependant éviter de favoriser de manière injustifiable un secteur national spécifique».

La Commission est d'avis que cette dernière orientation est pertinente, compte tenu notamment du fait que la mesure d'aide aux investissements mise à exécution par les autorités françaises est de nature à favoriser certains exploitants agricoles appartenant à trois secteurs de production bien ciblés: les secteurs des viandes bovine, porcine et avicole.

S'agissant en plus de secteurs très ouverts à la concurrence au niveau communautaire (voir ci-dessus), il paraît indéniable que toute aide en faveur des producteurs concernés pourrait avoir des effets sur la libre concurrence et que celle-ci risque, dès lors, d'être faussée.

Il s'ensuit que, lorsque des aides publiques menacent de fausser la concurrence, seules celles dont les caractéristiques sont conformes aux règles de concurrence applicables pourraient être considérées par la Commission comme ne favorisant pas «de manière injustifiable» un secteur déterminé et profiter éventuellement des dérogations prévues à cet effet par l'article 87 du traité.

#### 1.4. Conclusion: la mesure est une aide d'état au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité

Les sommes allouées aux éleveurs de bovins, de porcs et de volailles confèrent à ces producteurs un avantage dont d'autres productions ne peuvent pas bénéficier. Il s'agit donc d'une aide accordée par la France qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, et qui est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. En conséquence, cette mesure relève de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

## 2. Application de l'article 87 paragraphe 3, point c), du traité

L'article 87, paragraphe 3, point c), prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée à l'article 87 précité, les aides doivent contribuer au développement du secteur en question.

### 2.1. Illégalité des aides en cause

L'article 1<sup>er</sup>, point f), du règlement (CE) n° 659/1999 définit l'«aide illégale» comme une aide nouvelle mise à exécution en

violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. La notion d'«aide nouvelle» couvre quant à elle toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante.

Tout régime d'aide autorisé par la Commission dans lequel des changements importants sont par la suite introduits — dans le cas d'espèce, relatifs à la participation d'un organisme public au financement de l'aide notifiée à la Commission, altérant de manière significative la clé de financement et, partant, l'intensité de l'aide —, constitue une nouvelle aide qui doit être notifiée au sens de l'article 88 du traité à la Commission et être autorisée par celle-ci.

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, l'obligation prévue à la première phrase de l'article 88, paragraphe 3, d'informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ne s'applique pas uniquement au projet initial mais s'étend également aux modifications apportées ultérieurement à ce projet, étant entendu que de telles informations peuvent être fournies à la Commission dans le cadre des consultations auxquelles donne lieu la notification initiale <sup>(28)</sup>.

Cette obligation de notification a été consacrée par la suite à l'article 1<sup>er</sup>, point c), du règlement (CEE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE <sup>(29)</sup>.

Il se dégage de tout cela que les aides d'État mises à exécution par la France consisteraient en des aides nouvelles non notifiées à la Commission et qui pourraient, de ce fait, constituer des aides illégales au sens du traité.

Il faut préciser, par ailleurs, que l'inclusion d'une fiche d'information dans l'inventaire des aides élaboré par le ministère de l'agriculture n'a qu'une valeur purement informative et ne saurait être qualifiée de notification aux termes du traité. D'ailleurs, les informations qui y figurent ne font pas non plus référence à la participation des Agences de l'eau dans le programme, tout en affirmant que la participation de l'État s'élève à 35 % des coûts des investissements.

La variation de l'intensité de l'aide semble constituer en soi un élément modificateur de la substance de l'aide qui rend obligatoire la notification au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité. En tout état de cause, dans l'hypothèse où la Commission n'aurait pas eu à considérer le régime en cause comme étant une aide nouvelle, le fait de ne pas avoir communiqué à la Commission la participation d'un établissement public dans le financement, avec les effets que cela entraînerait sur l'intensité de l'aide, constituerait un motif justifiant l'ouverture de la procédure d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité, tel que prévu à l'article 9 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil. Selon cet article, la Commission peut révoquer une décision dans le cas où celle-ci reposerait sur des informations inexacts transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision.

<sup>(28)</sup> CJCE, 9 octobre 1984, affaires jointes 91 et 127/83, Heineken Brouwerijen BV contre Inspecteur der Vennootschapsbelasting à Amsterdam et à Utrecht, Rec. 1984, p. 3435.

<sup>(29)</sup> Une «aide nouvelle» est définie comme étant toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante (JO L 83 du 27.3.1999, p. 43).

## 2.2. *Évaluation des mesures sous l'angle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité*

D'après le point 2.3.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole <sup>(30)</sup>, toute aide illégale au sens de l'article 1<sup>er</sup> point f), du règlement (CE) n° 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

S'agissant dans le cas d'espèce d'un régime d'aides mis à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1994, il doit être évalué conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où ledit régime a été mis en exécution, c'est-à-dire l'année 1994 en ce qui concerne les volets porcin et bovin, et l'année 1995 pour ce qui est du volet avicole.

Les autorités françaises prétendent que les différents volets composant le PMPOA avaient déjà fait l'objet d'approbation par la Commission avant leur inclusion dans le programme. Leur inclusion dans le PMPOA n'aurait pas, d'après elles, entraîné de changements substantiels dans la nature de l'intervention étatique ou dans le type d'actions financées.

Au vu des arguments avancés par les autorités françaises, un examen du PMPOA à la lumière des décisions adoptées par la Commission et des règles applicables au moment de l'entrée en vigueur du programme s'avère nécessaire.

### 2.2.a) Investissements subventionnables et forme des aides

La Commission note que, pour ce qui concerne le secteur porcin, la nature des investissements est effectivement reprise par le PMPOA. Bien que des variations concernant la forme de l'aide aient pu être constatées, celles-ci ne sont pas de nature à mettre en cause la compatibilité de l'aide avec le traité. Ainsi, les investissements correspondent essentiellement à ceux notifiés à la Commission et autorisés par celle-ci. De ce fait, la Commission peut reprendre — et se réfère donc à — ses conclusions adoptées dans le cas de l'aide d'État N 136/91.

En ce qui concerne le secteur bovin, la Commission, même si elle n'a pas examiné l'aide à l'époque sous l'angle des règles communautaires de concurrence, est à présent en mesure de constater leur compatibilité avec ces règles. En effet, ce dispositif tel qu'il a été décrit plus haut ne diffère quasiment pas de celui applicable au secteur porcin. La Commission peut ainsi reprendre — et se réfère donc à — ses conclusions tirées dans le cadre de l'aide d'État N 136/91 concernant le secteur porcin.

Pour ce qui est du secteur avicole, la Commission note que le PMPOA reprend exactement le dispositif tel qu'elle l'avait autorisé. De ce fait, la Commission confirme — et se réfère donc à — ses conclusions adoptées dans le cas de l'aide d'État N 342/94.

En ce qui concerne le régime en faveur des jeunes agriculteurs s'installant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996, le régime n'apporte pas de changements au régime dans sa partie relative aux investissements éligibles, mais se limite à un changement de la forme de l'aide dans la partie financée par l'État.

<sup>(30)</sup> JO C 28 du 1.2.2000, p. 2, et JO C 232 du 12.8.2000 (rectificatif).

La Commission, tout en se référant aux arguments donnés lors de l'examen des régimes en cause, conclut que, en ce qui concerne la nature des investissements et les formes d'aide prévues par les autorités françaises dans le cadre du PMPOA, celles-ci, tout en étant entachées d'illégalité, ont été mises à exécution en conformité avec les règles européennes de concurrence applicables à l'époque. La Commission ne remet donc pas en cause cette partie de l'application de l'aide.

### 2.2.b) Clé de financement et taux d'aide

Il y a lieu de rappeler que, selon le cadre normatif applicable au moment de l'entrée en vigueur du programme, le plafond pour les aides aux investissements en faveur de la protection de l'environnement était de 35 % des coûts supportés (45 % dans les zones défavorisées).

En effet, l'article 12, paragraphe 5, cinquième tiret, du règlement (CEE) n 2328/91, qui prévoyait un examen des aides nationales au regard des anciens articles 92 et 93 (devenus 87 et 88) du traité et de l'article 6 dudit règlement, autorisait les aides aux investissements visant la protection de l'environnement pour autant qu'elles n'entraînent pas une augmentation de la production. Dans sa décision concernant l'aide d'État N 136/91, la Commission a tenu compte du fait qu'elle avait pour pratique de considérer comme compatible avec le marché commun un taux de 35 % des coûts éligibles pour ce type d'aides [45 % dans les zones défavorisées <sup>(31)</sup>]. Ces taux d'aide ont été confirmés par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement <sup>(32)</sup> (point 3.2.3), entré en vigueur en 1994, peu après l'entrée en vigueur du programme.

L'existence et la nature de ces plafonds ont par ailleurs été explicitées par les autorités françaises dans les circulaires sectorielles d'application du PMPOA. En effet, elles y écrivent que «l'Union européenne a autorisé que les aides publiques à ce type d'investissements liés à l'amélioration de l'environnement atteignent le taux dérogatoire de 35 %».

Compte tenu du fait que la clé de financement du programme envisage une participation aux coûts des investissements d'un tiers pour l'État et les collectivités territoriales (à parité, c'est-à-dire un sixième pour chaque partie), d'un tiers pour les Agences de l'eau et d'un tiers pour les exploitants, et compte tenu notamment du fait que la contribution des Agences de l'eau constitue une aide d'État, la Commission constate à ce stade que les plafonds d'aide autorisés pour ce type d'investissements semblent ne pas avoir été respectés. En effet, la contribution des Agences de l'eau dans le financement du PMPOA aurait eu pour résultat d'élever le taux de financement public à deux tiers des coûts des investissements, c'est à dire, à environ 66,6 % des coûts supportés. Cela aurait représenté un dépassement de taux permis d'environ 31,6 % (21,6 % dans les zones défavorisées) des coûts supportés. Le même dépassement aurait eu lieu pour ce qui concerne le régime en faveur des jeunes agriculteurs s'installant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996, puisque les modifications apportées au régime ne concernent que la forme de l'aide dans la partie financée par l'État, et ne conduisent donc pas à une augmentation globale du taux d'intervention en faveur de ceux-ci.

<sup>(31)</sup> Au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (JO L 128 du 19.5.1975, p. 1).

<sup>(32)</sup> JO C 72 du 10.3.1994.

Toutefois, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2000 — date d'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices agricoles —, la Commission autorise, sur la base desdites lignes directrices (point 4.1.1.2) des taux d'aide pour ce type d'investissements de 40 % des coûts supportés (50 % pour les zones défavorisées). Pour les jeunes agriculteurs, le taux accepté est de 45 % (55 % en zone défavorisée). Cela signifie que, en application de ces conditions plus favorables, pour les aides octroyées en 2000 et 2001, le dépassement des taux d'aides octroyées n'aurait été que de 26,6 % (16,6 % dans les zones défavorisées) et, pour les jeunes agriculteurs, de 21,6 % (11,6 % dans les zones défavorisées), pour les investissements réalisés à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2000 et répondant à toutes les conditions prévues par les lignes directrices.

Puisque les aides autorisées par la Commission en faveur des investissements étaient basées sur un taux de financement public maximal autorisé de 35 % des coûts desdits investissements (45 % dans les zones défavorisées), voire de 40 à 55 %, selon les cas, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2000, la Commission est amenée à constater, à ce stade, que le niveau des aides octroyées en application du PMPOA semble ne pas correspondre au taux d'aide autorisé par la Commission et que, de ce fait, tout financement public octroyé au-delà des plafonds autorisés constituerait une aide d'État incompatible avec le traité.

### 2.3. Diagnostic d'exploitation

D'après les informations envoyées par les autorités françaises, les diagnostics d'exploitation sont aidés à hauteur de 50 % par l'État et de 50 % par les Agences de l'eau. La Commission note que l'intervention des Agences de l'eau dans leur financement implique un relèvement du taux d'aide allant jusqu'à 100 % du coût de ceux-ci. Or, la Commission a approuvé cette aide par le passé en se basant sur des informations qui ne mentionnaient pas l'intervention des Agences de l'eau dans le régime. De ce fait, toutes les conclusions mentionnées plus haut en ce qui concerne la légalité de l'aide seraient applicables, *mutatis mutandis*, à cette aide.

Pour ce qui est de la nature de l'aide, la Commission se réfère aux décisions précédentes, où celle-ci a été approuvée.

En ce qui concerne le taux d'aide appliqué, la Commission note que, au moment de l'exécution de l'aide, elle avait pour habitude de permettre la participation des pouvoirs publics dans ce type d'actions jusqu'à un niveau de 100 % des coûts éligibles.

En effet, la prise en charge par l'État de la totalité des coûts des actions telles que les «audits environnementaux», consistant en des projets de suivi de l'impact sur l'environnement des exploitations d'élevage, étaient autorisables par la Commission en tant qu'aide à l'assistance technique aux éleveurs<sup>(33)</sup>.

La Commission conclut donc que le taux d'aide utilisé par les autorités françaises pour la réalisation des diagnostics d'exploitation est conforme aux règles de concurrence applicables.

## IV. CONCLUSION

La Commission ne soulève pas d'objection quant à la compatibilité avec les articles 87 à 89 du traité de la mesure d'aide relative aux diagnostics d'exploitation.

La Commission, pour les raisons exposées plus haut, n'est pas en mesure de se prononcer à ce stade sur la légalité et la compatibilité de cette mesure au regard de l'article 87 du traité.

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun de l'aide aux investissements financés dans le cadre du PMPOA pendant la période 1994-2001, notamment pour ce qui est des montants d'aide ayant pu être accordés en dépassement des intensités de 35 %, voire 45 %, autorisées. La Commission a, par conséquent, décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2 du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de la mesure dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre. Elle invite les autorités françaises à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. En outre, la dépense relative aux mesures nationales qui affectent directement des mesures communautaires pourra se voir refuser l'imputation au budget du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).»

<sup>(33)</sup> Lettre de la Commission aux États membres du 19 septembre 1975 (n° 75/29416), «Propositions de mesures utiles au sujet des aides octroyées par les États membres dans le secteur de l'élevage et des produits de l'élevage».

**Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE****Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones**

(2001/C 179/06)

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

<b>Fecha de adopción de la decisión:</b>	25.1.2001
<b>Estado miembro:</b>	Alemania (Sajonia-Anhalt)
<b>Ayuda:</b>	N 796/2000
<b>Objetivo:</b>	Ayuda a la internacionalización
<b>Fundamento jurídico:</b>	Richtlinien zur Förderung von Beteiligungen im Ausland für Unternehmen in Sachsen-Anhalt — Garantien für Kapitalbeteiligungen und Gesellschafterdarlehen
<b>Presupuesto:</b>	100 millones de marcos alemanes (51,13 millones de euros)
<b>Intensidad o importe de la ayuda:</b>	Limite máximo de acumulación: empresas medianas: 7,5 % bruto, pequeñas empresas: 15 % bruto
<b>Duración:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2003
<b>Otros datos:</b>	Modificación técnica de un régimen aprobado por la Comisión (N 600/97 y N 13/99)

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**No oposición a una concentración notificada****(Asunto COMP/M.2303 — Ciaoweb/WE Cube)**

(2001/C 179/07)

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

El 14 de junio de 2001 la Comisión decidió no oponerse a la concentración de referencia y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo. El texto completo de la decisión está disponible únicamente en italiano y se hará público después de liberado de cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en versión papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (véase la lista en la última página),
- en formato electrónico en la versión «CIT» de la base de datos CELEX, con el número de documento 301M2303. CELEX es el sistema de documentación automatizado de la legislación de la Comunidad Europea.

Podrá obtenerse más información en la dirección siguiente:

EUR-OP  
Información, Mercadotecnia y Relaciones Públicas  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (35 2) 29 29-427 18, fax (35 2) 29 29-427 09.

---

**No oposición a una concentración notificada**  
**(Asunto COMP/M.2213 — Du Pont/Sabancı Holdings/JV)**

(2001/C 179/08)

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

El 22 de diciembre de 2000 la Comisión decidió no oponerse a la concentración de referencia y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo. El texto completo de la decisión está disponible únicamente en inglés y se hará público después de liberado de cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en versión papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (véase la lista en la última página),
- en formato electrónico en la versión «CEN» de la base de datos CELEX, con el número de documento 300M2213. CELEX es el sistema de documentación automatizado de la legislación de la Comunidad Europea.

Podrá obtenerse más información en la dirección siguiente:

EUR-OP  
Información, Mercadotecnia y Relaciones Públicas  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (35 2) 29 29-427 18, fax (35 2) 29 29-427 09.

---

**No oposición a una concentración notificada**  
**[Asunto COMP/M.2281 — Endesa/CDF/Snet (vease CECA.1352)]**

(2001/C 179/09)

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

El 17 de abril de 2001 la Comisión decidió no oponerse a la concentración de referencia y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo. El texto completo de la decisión está disponible únicamente en francés y se hará público después de liberado de cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en versión papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (véase la lista en la última página),
- en formato electrónico, en la versión «CFR» de la base de datos CELEX, con el número de documento 301M2281. CELEX es el sistema de documentación automatizado de la legislación de la Comunidad Europea.

Podrá obtenerse más información sobre en la dirección siguiente:

EUR-OP  
Información, Mercadotecnia y Relaciones Públicas  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (35 2) 29 29-427 18, fax (35 2) 29 29-427 09.

---



**Notificación previa de una operación de concentración****(asunto COMP/M.2337 — Nestlé/Ralston Purina)**

(2001/C 179/10)

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

1. El 15 de junio de 2001 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo <sup>(1)</sup>, modificado por el Reglamento (CE) n° 1310/97 <sup>(2)</sup>, la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa Nestlé SA («Nestlé, Suiza»), adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de la empresa Ralston Purina Company («Ralston Purina», Estados Unidos) mediante la adquisición de acciones.

2. **Ámbito de actividad de las empresas implicadas:**

- Nestlé: producción y venta de productos alimentarios, incluyendo comida para animales de compañía,
- Ralston Purina: producción y venta de comida para animales de compañía, productos alimentarios para perros y gatos.

3. Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4064/89. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4. La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto al proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01/296 72 44] o por correo, referencia COMP/M.2337 — Nestlé/Ralston Purina, a la dirección siguiente:

Comisión Europea  
Dirección General de Competencia  
Dirección B — Grupo operativo de operaciones de concentración  
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70  
B-1000 Bruxelles/Brussel.

---

<sup>(1)</sup> DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.

<sup>(2)</sup> DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.

**Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen**

(2001/C 179/11)

Esta publicación otorga un derecho de oposición con arreglo al artículo 7 del citado Reglamento. Cualquier oposición a esta solicitud debe enviarse por mediación de la autoridad competente de un Estado miembro en un plazo de seis meses a partir de la presente publicación. La publicación está motivada por los elementos que se enumeran a continuación, principalmente el punto 4.6, según los cuales se considera que la solicitud está justificada en virtud del Reglamento (CEE) nº 2081/92.

REGLAMENTO (CEE) Nº 2081/92 DEL CONSEJO

SOLICITUD DE REGISTRO: ARTÍCULO 5

DOP ( ) IGP (x)

Número nacional del expediente: 3/2000

**1. Servicio competente del Estado miembro**

Nombre: ministero delle politiche Agricole e forestali

Dirección: Via XX Settembre 20, I-00187 Roma

Teléfono: (39) 064 81 99 68

Fax: (39) 064 201 31 26

Dirección electrónica: qualità@politicheagricole.it

**2. Agrupación solicitante**

2.1. Nombre: Associazione dei piccoli produttori fagioli di Sorana — Il Ghiareto — Onlus

2.2. Dirección: Via del Pozzo 2, Frazione Sorana, I-51010 Pescia (PT)

2.3. Composición: Productor/transformador (x) otros ( ).

**3. Tipo de producto:** Hortaliza

Categoría 1.6: Frutas, hortalizas y cereales en estado natural o transformados.

**4. Descripción del pliego de condiciones**

(Resumen de las condiciones del apartado 2 del artículo 4).

4.1. **Nombre:** Fagiolo di Sorana.

4.2. **Descripción:** Leguminosa de tipo trepador, perteneciente a la especie botánica *Phaseolus Vulgaris L.*

Las principales características de las semillas, en estado seco, son las siguientes:

— tegumento de escasa o nula consistencia, que no se pierde durante la cocción,

- color blanco lechoso, con ligero veteado perlino, o rojo vinoso con estrías de color más intenso,
  - forma aplastada, casi plana, en el caso de la semilla blanca; casi cilíndrica, con tegumento más consistente, en el caso de la roja.
- 4.3. **Zona geográfica:** La zona de cultivo de la «Fagiolo di Sorana» se extiende a lo largo de unas 660 ha y abarca parte del territorio del término municipal de Pescia (Pistoia) situado en las vertientes oriental y occidental del torrente Pescia di Pontito, que constituye la parte noroccidental del torrente Pescia di Pescia.
- 4.4. **Prueba de origen:** La producción de la «Fagiolo di Sorana» se sitúa en un pequeño valle por donde fluye el torrente Pescia. Cultivada en las riberas de este torrente, la «Fagiolo di Sorana» debe su fama a un conjunto de factores medioambientales y naturales que difícilmente pueden reproducirse en otros lugares.

En efecto, la referida zona se caracteriza por las tierras arenosas, de carácter aluvial, y por estar al amparo de las inclemencias del tiempo, con un período reducido de exposición al sol, aun en los meses de verano, y un elevado grado de humedad ambiente.

El agua del torrente Pescia, pobre en sales minerales, calcio y nitratos, contribuye a determinar las características de la «Fagiolo di Sorana».

La fama de la «Fagiolo di Sorana» está documentada desde tiempo atrás. Gioacchino Rossini conocía y apreciaba sus propiedades organolépticas, hasta tal punto que en una carta a su amigo Giovanni Pacini pidió expresamente la singular y preciada hortaliza como remuneración por la revisión de algunas partituras.

La rastreabilidad del producto está garantizada por el hecho de que los productores de la «Fagiolo di Sorana» que se propongan comercializar las judías con la indicación geográfica protegida, deben inscribir los terrenos en el oportuno registro y presentar al organismo de control, hasta el 31 de mayo, inclusive, una declaración de cultivo de su parcela y hasta el 31 de octubre, inclusive, una declaración anual del volumen de producción obtenido.

- 4.5. **Método de obtención:** La «Fagiolo di Sorana» se cultiva en tierras arenosas fácilmente irrigables con las aguas superficiales del Pescia. El abonado de fondo es fundamentalmente de tipo orgánico. Las semillas utilizadas para la siembra proceden de la población local.

El fruto se recoge de la planta a mano, en el momento en que está a punto de tener lugar la apertura espontánea de las valvas de la vaina. Para completar la desecación, el grano se mantiene expuesto al sol durante 3 o 4 días, tras lo cual se conserva en los oportunos contenedores, añadiéndosele pimienta en grano, raíces de valeriana u hojas de laurel.

La producción máxima de grano seco por cada 1 000 m<sup>2</sup> cultivados no supera los 200 kg.

- 4.6. **Vínculo:** La «Fagiolo di Sorana» constituye desde hace siglos un producto típico de esa zona geográfica concreta.

La «población» -ecotipo- de judía que con el tiempo se ha seleccionado en ese medio geográfico concreto se diferencia sensiblemente de las demás judías de tipo «cannellino» (blancas y pequeñas), no sólo por sus características organolépticas sino también por el tamaño más reducido de las semillas, la forma aplastada, casi plana, y sobre todo por la piel, extremadamente fina, sin apenas consistencia.

Cabe pensar que estas propiedades de la «Fagiolo di Sorana» no vienen determinadas únicamente por el ecotipo seleccionado en la zona de producción a lo largo de varios siglos de cultivo, sino también por las características específicas de ese medio natural.

- 4.7. **Estructura de control:**

Nombre: Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici

Dirección: Via Jacopo Barozzi 8, I-40100 Bologna.

- 4.8. **Etiquetado:** La «Fagiolo di Sorana» se envasa para su comercialización en recipientes de vidrio o en bolsas de plástico para alimentos, de peso y dimensiones variables. Los envases deben llevar un distintivo con el símbolo gráfico identificativo y la inscripción IGP «Fagiolo di Sorana». En la etiqueta puede añadirse la mención «*di ghiareto*» («de guijarral»), si el producto procede del territorio situado a ambos lados del Pesca di Pontito, comprendida en la zona delimitada; o la mención «*di poggio*» («de collado»), en el caso de la producción procedente de la zona exterior al guijarral, comprendida asimismo en la zona delimitada.

La etiqueta puede llevar la indicación «blanca» o «roja», en relación con el color del grano.

El símbolo gráfico identificativo de la «Fagiolo di Sorana» está constituido por una fiel reproducción del antiguo blasón del pueblo, cuyo nombre se deriva, al parecer, de «*Rocca Sovrana*»), y está formado por un escudo rodeado de varas de laurel y encina.

- 4.9. **Condiciones nacionales:** —

Nº CE: IT/00134/2000.06.13.

**Fecha de recepción del expediente completo:** 13 de junio de 2000.

---

## III

*(Informaciones)*

## COMISIÓN

**Modificación del anuncio de licitación de la subvención a la expedición de arroz descascarillado de grano largo con destino a la isla de Reunión**

(2001/C 179/12)

*(Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 293 de 14 de octubre de 2000)*

En la página 25, el punto 2 del título I, «Objeto», se sustituye por el texto siguiente:

«2. La cantidad total para la que podrá fijarse la subvención máxima a la expedición con arreglo al apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 2692/89 de la Comisión <sup>(1)</sup> modificado por el Reglamento (CE) n° 1453/1999 <sup>(2)</sup> será de unas 35 000 toneladas.»

---

<sup>(1)</sup> DO L 261 de 7.9.1989, p. 8.

<sup>(2)</sup> DO L 167 de 2.7.1999, p. 19.

---